Mujeres Echando Raíces
Cultivamos autonomía para cosechar futuro

France
AFD Agence Française de Développement
Expertise France Groupe AFD

Relatoría Seminario Internacional



Un techo seguro para ellas

PROYECTO
MUJERES ECHANDO RAÍCES - MERA



Mujeres Echando Raíces

Cultivamos autonomía
para cosechar futuro

Echamos raíces, cultivamos autonomía y cosechamos futuro.

MERA - Mujeres echando raices

Jackeline Rojas
Directora de programa para Colombia y Ecuador

Solenn Lorre
Encargada de Monitoreo-Evaluación y de Comunicaciones

Marie-Dominique de Suremain
Urbanista, experta en género y desarrollo urbano sostenible

Esperanza Gonzales
Coordinación proyecto MERA Colombia

Gloria Camacho
Coordinación proyecto MERA Ecuador

Relatoría del Seminario:
Rosa Elena Donoso Gómez y Marie-Dominique de Suremain

Forma de citar sugerida:
Expertise France (2025). Relatoría del Seminario "Un Techo Seguro para Ellas" (Cali, Colombia, 12–14 de noviembre de 2025). Relatoría elaborada por R. E. Donoso Gómez y Marie-Dominique de Suremain. Proyecto MERA.

Agradecemos a las autoridades, organizaciones, colegas y a las personas residentes de la Comuna 15 de Cali, quienes participaron en este seminario, por compartir conocimientos y compromisos, posibilitando una mirada crítica al trabajo que realizamos en cada uno de nuestros espacios.

Esta relatoría ha sido construida a partir de sus ponencias y presentaciones, procurando mantener fielmente la voz y el contenido expresado por cada participante y recibiendo la aprobación de cada autor y autora antes de su publicación.

El diseño general, los términos de referencia del evento, los contactos con panelistas han sido elaborados por Marie-Dominique de Suremain, con la participación de un comité científico compuesto por los equipos de Expertise France en cada país y liderado por Solenn Lorre. Los operadores del proyecto han sido participes de la organización y realización del día de campo y debates.

Cali, febrero, 2026

Mujeres Echando Raíces
Cultivamos autonomía para cosechar futuro

Nota conceptual

El presente documento de sistematización y relatoría recoge los principales debates, aprendizajes y conclusiones del seminario "Un techo seguro para ellas", realizado en el marco del proyecto Mujeres Echando Raíces (MERA), financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) e implementado por Expertise France de manera piloto en Cali, Colombia, y en Quito, Ecuador con diversos aliados del sector público y organizaciones sin fines de lucro (ONGs) de cada ciudad. El seminario constituyó un espacio de intercambio regional e intersectorial orientado a reflexionar sobre el acceso a una vivienda digna y segura para mujeres en movilidad humana, desde un enfoque de derechos humanos, género y territorio.

Las discusiones pusieron en evidencia la necesidad de sostener y profundizar espacios de diálogo y aprendizaje colectivo en torno a las políticas públicas de género, vivienda, gobernanza, institucionalidad y movilidad humana, así como de fortalecer a las organizaciones populares que acompañan los procesos habitacionales en los territorios. El seminario posiciona en la agenda pública la vivienda en arriendo como una solución estructural para amplios sectores urbanos de bajos ingresos y para la integración de personas en movilidad humana, destacando la urgencia de atender el déficit cualitativo de la vivienda, tanto en propiedad como en arriendo.

Se puso en relieve que el enfoque Housing First, se adapta a las trayectorias habitacionales de mujeres migrantes y a las realidades de las ciudades latinoamericanas. Desde una perspectiva feminista, el mejoramiento de la habitabilidad, el acceso a contratos de arriendo protectores y la reducción del hacinamiento y de la inseguridad residencial contribuyen a mejorar la salud física y mental de las mujeres, aliviar sus múltiples cargas de trabajo y fortalecer su autonomía, autoestima y empoderamiento.

El documento, a través de la relatoría de las diferentes intervenciones, subraya la necesidad de incorporar, en la política pública de vivienda y en articulación con las políticas sociales, nuevas herramientas normativas, financieras y de intervención social que reconozcan la vivienda digna y segura como un derecho humano de primer nivel, capaz de potenciar otros derechos. Vivir en condiciones adecuadas, con estabilidad residencial y acompañamiento social, permite a las mujeres mejorar sus ingresos, formarse, salir de situaciones de violencia de género, acceder a asesoría legal y promover relaciones más igualitarias en el hogar, el barrio y el trabajo.

Finalmente, la sistematización destaca el valor de las iniciativas comunitarias que articulan a mujeres migrantes y comunidades de acogida, fortalecen el tejido social, reducen la xenofobia y sientan las bases para ciudades más cuidadoras, incluyentes y democráticas, donde las mujeres puedan, con dignidad y esperanza, echar raíces.

Contenido

01

PRIMER DÍA:
Fundamentos conceptuales y debates estratégicos 07

Panel de apertura 07

Paneles temáticos 11

Panel 1. Introducción general 13

Panel 2. Avances del proyecto MERA en la provincia de Pichincha (Ecuador) y en Santiago de Cali (Colombia) 16

Panel 3. Proyectos internacionales de integración de la población venezolana en Colombia y Ecuador 20

Panel 4. Desde la perspectiva de género: de la academia a la práctica en América Latina 23

Panel 5. Política pública local de acceso a albergues y vivienda social en arriendo, incluyendo la lucha contra las violencias de género en Francia 30

Panel 6. Mujeres en la construcción y autoconstrucción de sus viviendas en Bolivia y Colombia 35

02

SEGUNDO DÍA:
Visita a la Comuna 15 y mesas de discusión 39

03

TERCER DÍA:
Relatoría de mesas de discusión 46

Mesa # 1: La habitabilidad de la vivienda en arriendo con perspectiva de género en sectores populares de la ciudad.
Facilitadora: Daniela Núñez, ONU-Hábitat 47

Mesa # 2: La adaptabilidad del proyecto a las necesidades y el empoderamiento de las "Mujeres echando raíces".
Facilitadora: Verónica Jaramillo 48

Mesa # 3: El componente de mejoramiento de vivienda de MERA como contribución a la política pública de vivienda social y mejoramiento barrial en Cali y Quito.
Facilitadora: Rosa Elena Donoso 50

Mesa # 4: Cómo adaptar el enfoque Housing First al contexto de MERA, y otros contextos, articulando componentes.
Facilitadora: Marie-Dominique de Suremain 51

Mesa # 5: Constituir una red de arrendadores, definir mejoras, garantías y subsidios, sensibilizar a la comunidad de acogida.
Facilitadora: Valeria Loaiza, AVSOO 53

Cierre de las mesas 56

04

CONCLUSIONES GENERALES DEL EVENTO 57

PRIMER DÍA:
Fundamentos conceptuales y debates estratégicos

01

Panel de Apertura



ALEJANDRO EDER
Alcalde de Santiago de Cali, Colombia



MARION GIACOBBI
Consejera política del Embajador de Francia en Colombia



AYDEE M. BELLO
Viceministra de Vivienda, Colombia



PAOLA PABÓN
Prefecta de la Provincia Pichincha, Ecuador



PHILIPPE SERRES
Director Región andina, Agencia francesa de desarrollo (AFD), Bogotá, Colombia



MURIELLE GURTNER
Coordinadora Regional para la región andina, Expertise France, Bogotá, Colombia

El evento inició con las palabras de apertura de las autoridades de Colombia, Ecuador y Francia. El secretario de Gobierno de Santiago de Cali, Fernando Grillo, dirigió las palabras generales de bienvenida al evento. Destacó el carácter histórico de la urbe como ciudad de acogida para miles de familias migrantes y reafirmó el compromiso de la administración distrital con el acceso a una vivienda digna, el empoderamiento económico de las mujeres y la reducción de violencias basadas en género.

Recalcó la pertinencia del proyecto Mujeres Echando Raíces (MERA), financiado por AFD y Expertise France, del cual más de 300 mujeres han sido beneficiarias. Asimismo, informó sobre inversiones recientes: 72 000 millones de pesos para reducir el déficit de vivienda, 1300 millones para fortalecer el sistema distrital CuidArte. El secretario resaltó la importancia de la cooperación internacional, especialmente con Francia y Ecuador, para construir soluciones locales con impacto real en la vida de las comunidades.

La viceministra Aydeé Marsiglia Bello presentó el enfoque actual de la política nacional de vivienda, centrado en revalorizar los barrios populares y evitar su estigmatización; entender la vivienda no solo como un resultado o indicador, sino como un medio de vida, cuidado y transformación social; reconocer que una vivienda digna funciona como mecanismo de prevención de violencias, especialmente para mujeres vulnerables, migrantes y cuidadoras. Ella enfatizó la necesidad de abordar tanto el déficit cuantitativo como el cualitativo de vivienda, priorizando mejoras en hogares autoconstruidos, muchos de ellos liderados por mujeres cabezas de familia.

Además, se destacó la alianza entre la Alcaldía de Cali, el Gobierno de Colombia, la AFD, Expertise France y el Gobierno del Ecuador. Esta colaboración permite intercambiar aprendizajes, fortalecer capacidades locales y promover iniciativas de vivienda digna con enfoque de género y de cuidados. Tanto autoridades locales como nacionales destacaron el rol de las mujeres beneficiarias como protagonistas del proyecto, reconocidas como motor y ejemplo de liderazgo comunitario.

La viceministra resaltó la importancia de promover una visión integral de la vivienda, concebida no solo como un objeto físico, sino como un espacio desde donde se ejerce la ciudadanía y se construyen proyectos de vida. Enfatizó la necesidad de dignificar los barrios populares, que concentran la mayor parte del déficit y que suelen estar expuestos a estigmatización. Señaló que entender la vivienda como un entorno de protección y cuidado es fundamental para prevenir violencias, especialmente aquellas que afectan a mujeres, migrantes y poblaciones desplazadas.

La viceministra explicó que, además del cuantitativo, existe un déficit cualitativo importante en hogares encabezados por mujeres, quienes cargan con múltiples responsabilidades. Sus viviendas, muchas veces autoconstruidas, presentan deterioro, sobreocupación o carencia de servicios básicos. Por ello, insistió en ampliar las formas de acceso a soluciones habitacionales, incluyendo modelos donde las propias familias —y en particular las mujeres— puedan participar en los procesos de mejoramiento y fortalecimiento comunitario.

El alcalde de Santiago de Cali, Alejandro Eder, abrió su intervención agradeciendo la presencia de autoridades nacionales e internacionales, entre ellas representantes del Gobierno francés, la prefecta del país vecino, la viceministra de Vivienda de Colombia y las mujeres participantes del programa, destacando la importancia de este encuentro para la ciudad.

El Sr. Eder expresó un reconocimiento especial al Gobierno de Francia por apoyar la iniciativa, subrayando que desde el inicio de su administración Cali se ha trazado el objetivo de convertirse en un ejemplo nacional en reconciliación e inclusión. En este esfuerzo, afirmó, es fundamental trabajar por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres caleñas y migrantes que residen en la ciudad.

El alcalde explicó que una de las principales innovaciones sociales de su administración es el programa CuidArte, enfocado en fortalecer y acompañar a madres cuidadoras, mujeres que sostienen hogares y atienden tanto a niñas y niños como a personas con discapacidad. Señaló que el programa busca liberar tiempo, ofrecer oportunidades y abrir caminos de autonomía para miles de mujeres, propósito que conecta directamente con la iniciativa apoyada por Francia.

En un tono personal, compartió la historia de su madre, Elena Garcés, una feminista que, después de ser excluida de la educación universitaria por razones de época y género, decidió estudiar siendo adulta. Esta historia marcó profundamente su visión sobre el empoderamiento femenino y la importancia de crear condiciones reales para que las mujeres puedan desarrollarse a plenitud. A. Eder enlazó esta experiencia con su convicción personal de que la mejor política social es el empleo, en especial cuando se trata de empleo formal y digno para mujeres. Sostuvo que una mujer con trabajo es una mujer empoderada, capaz de sostener a su familia y avanzar con autonomía.

El alcalde también destacó la política habitacional de su administración, que calificó de ambiciosa. Anunció que Cali entregará más de 4500 subsidios de vivienda nueva y mejoramiento, insistiendo en que la vivienda no solo transforma



la vida de las familias —en particular aquellas encabezadas por mujeres— sino que además impulsa la economía local a través del sector de la construcción. Lamentó que los programas nacionales de vivienda hayan sido desmontados, pero reafirmó la decisión del gobierno de Cali de seguir apostando por este derecho fundamental.

En la parte final de su intervención, A. Eder se refirió a la situación reciente del tren de cercanías del Valle del Cauca, proyecto que considera esencial para la región y que, según afirmó, ha sido detenido por decisiones políticas del gobierno central. Agradeció otra vez el acompañamiento técnico y financiero del Gobierno francés y la AFD en este proyecto y aseguró que seguirá trabajando para que el tren se convierta en realidad. Cerró su intervención reiterando su compromiso con las mujeres de Cali, con la inclusión y con una ciudad que, apuesta por la reconciliación, la movilidad sostenible y oportunidades reales para todas las familias.

La intervención de Philippe Serres, representante de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), abrió el espacio con un saludo a las autoridades nacionales y locales presentes, así como a las y los representantes de la sociedad civil, destacando el valor de este encuentro como un espacio de diálogo entre distintos niveles de gobierno, cooperación internacional y actores sociales.

Desde el inicio, subrayó que el objetivo central del evento era enfrentar uno de los desafíos más urgentes de la región: garantizar un techo seguro y digno para mujeres y familias, especialmente aquellas que viven en contextos de alta vulnerabilidad.

P. Serres señaló que este espacio no debía entenderse únicamente como un seminario de intercambio de experiencias, sino como una oportunidad para impulsar soluciones concretas y transformadoras, capaces de incidir de manera directa en la vida cotidiana de miles de hogares en América Latina, y de forma particular en Colombia y Ecuador. En ese marco, destacó que, desde la visión de la AFD, los desafíos vinculados a la vivienda, la migración y la desigualdad de género están profundamente interrelacionados. La movilidad humana —forzada o voluntaria— impacta directamente en la demanda de vivienda, en los servicios sociales y en los procesos de integración económica y cultural.

No obstante, enfatizó que detrás de las cifras, los programas y los proyectos existen historias de vida que no deben perderse de vista. En particular, llamó a reconocer y escuchar a las mujeres que luchan por construir un futuro más seguro para sus hijas e hijos, y que buscan un lugar al que puedan llegar y llamar hogar. Estas trayectorias, afirmó, deben estar en el centro de las políticas y acciones de desarrollo.

Desde su rol como banco público de desarrollo, la AFD ha impulsado tanto mecanismos de financiamiento como fondos no reembolsables para mejorar el acceso a una vivienda digna y segura, integrando de manera explícita un enfoque de género. En este contexto, el proyecto Mujeres Echando Raíces se inserta en una dinámica regional más amplia de iniciativas orientadas a garantizar vivienda segura, accesible y con acompañamiento social.

En el caso de Ecuador, Serres destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de esquemas de crédito y cofinanciamiento que han permitido canalizar recursos de forma efectiva hacia municipios y familias que más lo necesitan. Gracias a estos mecanismos, se han movilizado



aproximadamente 57 millones de dólares para viviendas parcialmente subvencionadas destinadas a familias que ya contaban con terreno, así como cerca de 22 millones de dólares para la construcción de viviendas en suelo público. A ello se suma un componente de acompañamiento integral, administrativo, social y jurídico, por un monto aproximado de un millón de dólares, con el objetivo de asegurar que las familias no solo accedan a una vivienda, sino cuenten con las condiciones necesarias para habitarla con estabilidad y tranquilidad.

En Colombia, la AFD ha concentrado sus esfuerzos en las regiones más vulnerables, trabajando de manera articulada con bancos públicos de desarrollo como Findeter. Mediante créditos por alrededor de 150 millones de euros, complementados con subvenciones de la Unión Europea, se han financiado proyectos de transporte masivo e infraestructuras esenciales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de miles de personas. De forma paralela, se ha apoyado a más de 30 organizaciones feministas y de base comunitaria, con acciones orientadas al acceso a la justicia, la prevención de la violencia basada en género y el fortalecimiento de capacidades de las mujeres.

Finalmente, P. Serres reafirmó la visión de la AFD de que garantizar una vivienda digna y segura para cada mujer es un paso fundamental hacia sociedades más justas, resilientes y sostenibles. Subrayó que este objetivo solo puede alcanzarse mediante el trabajo conjunto entre gobiernos nacionales y locales, comunidades, municipios, bancos públicos y privados, y organizaciones de la sociedad civil. Concluyó señalando que los desafíos de la migración y la igualdad de género son interdependientes y requieren respuestas integrales basadas en la cooperación y el intercambio de experiencias, reafirmando el compromiso de la AFD de seguir trabajando para que ninguna mujer quede atrás.

La intervención de Muriel Gurtnet coordinadora regional para la región andina de Expertise France inició con un saludo cordial a las personas presentes y un reconocimiento a la ciudad anfitriona, destacando su identidad cultural y simbólica como un espacio de expresión, encuentro y libertad. Desde ese marco, se enfatizó el compromiso de la cooperación internacional con los procesos locales, particularmente con aquellos orientados a fortalecer la integración socioeconómica de las mujeres en contextos de vulnerabilidad.

Se señaló que el trabajo que se impulsa parte de un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres, articulado con el reconocimiento de la migración como un motor de desarrollo. Este enfoque entiende que la reducción de la pobreza y la exclusión solo puede abordarse mediante una acción multiactor, que convoque a gobiernos nacionales y locales, cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil y, de manera central, a las propias mujeres beneficiarias. Se destacó que este es un ejercicio de responsabilidad compartida, construido a partir de múltiples trayectorias de vida y experiencias concretas.

En este marco, se subrayó la importancia de promover espacios colaborativos que permitan el intercambio entre expertas y expertos, instituciones y mujeres participantes de los programas, con el objetivo de construir respuestas integrales. Uno de los ejes centrales de la intervención fue el posicionamiento del principio *Housing First* (la vivienda primero), reafirmando que el acceso a un techo seguro constituye la puerta de entrada para la integración social y económica. Se recalcó que, sin una vivienda estable, resulta inviable pensar en otros procesos como el acceso al empleo, a la educación, a los servicios digitales o a los sistemas de protección social.

La experiencia acumulada demuestra, según se señaló, que contar con un techo seguro actúa como un acelerador de los procesos de integración socioeconómica, ya que aporta estabilidad, confianza y condiciones mínimas para el desarrollo de proyectos de vida. En ese sentido, se reconoció el papel fundamental de las mujeres latinoamericanas, quienes han demostrado resiliencia y capacidad de sostener a sus familias, y para quienes la vivienda constituye una base desde la cual acceder y articular otros servicios y derechos.

Como ejemplo concreto, se mencionó la experiencia desarrollada en Cali, donde se ha conformado un banco de arrendadores y cerca de 300 mujeres han sido seleccionadas para recibir apoyo en el acceso a un techo seguro. Este proyecto piloto fue presentado como una iniciativa innovadora que cruza igualdad de género, integración social y acceso a bienes básicos. Hasta el momento, más de 150 mujeres han recibido acompañamiento con asistencia jurídica, y cerca de 130 han accedido a apoyo financiero, destacándose que el proyecto aún se encuentra en desarrollo.

Asimismo, se indicó que se están construyendo metodologías adaptadas a cada contexto, tanto en Cali como en Quito, a partir de un trabajo articulado con múltiples actores. Se destacó especialmente la colaboración con autoridades locales, como la Prefectura de Pichincha, así como con organizaciones socias en Ecuador. El proyecto se implementa de manera paralela en ambos países, con el objetivo de que los aprendizajes y buenas prácticas puedan difundirse e incidir en las políticas públicas y en los marcos institucionales nacionales.

Finalmente, se resaltó el valor del intercambio de experiencias como metodología de trabajo, mencionando la realización de visitas de estudio en Colombia y Francia que han permitido conocer y contrastar distintos modelos de intervención. La jornada fue presentada como una nueva oportunidad para ampliar el diálogo, sumar actores y fortalecer alianzas. La intervención cerró con un llamado a seguir posicionando esta temática, a replicar y escalar el proyecto mediante nuevas experiencias piloto, y a consolidar esfuerzos conjuntos para avanzar hacia soluciones sostenibles, agradeciendo la participación de panelistas, mujeres beneficiarias y personas asistentes al evento.

En representación de la Embajada de Francia, Marion Giacobbi consejera política de la Embajada de Francia en Colombia, inició con un saludo a las autoridades nacionales y locales presentes, así como a las delegaciones provenientes de Ecuador y de otros países de la región, y un agradecimiento a las personas asistentes. En su intervención, destacó el valor del seminario como un espacio propicio para el intercambio de experiencias, el debate informado y la construcción colectiva de buenas prácticas con potencial transformador frente a los desafíos globales compartidos.

Subrayó que estos desafíos incluyen la garantía del derecho a una vida libre de violencias y discriminación, el acceso a una vivienda segura, a ingresos dignos y a servicios de salud, así como la necesidad de fortalecer la gobernanza migratoria en todos los niveles, en un contexto internacional cambiante y complejo. En este sentido, se enfatizó la importancia de reforzar las capacidades de innovación social y de gobernanza inclusiva, incorporando todas las voces, en particular las de las personas directamente afectadas, para avanzar hacia sociedades más justas, igualitarias e inclusivas.

En el marco de esta reflexión, se presentó la diplomacia feminista como una prioridad estratégica de la política exterior de Francia. Este enfoque busca integrar de manera transversal la igualdad de género en todos los ámbitos de la acción diplomática, incluidos los campos económico, cultural, educativo y político. Se recordó que, a finales de octubre, Francia organizó la Cuarta Conferencia Internacional sobre Diplomacia Feminista, que reunió a cerca de 50 países y culminó con la firma, por primera vez, de una declaración política conjunta en la que 31 países reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas.

Este hito fue resaltado como particularmente significativo en un contexto internacional marcado por retrocesos en materia de derechos de las mujeres. Se señaló además que dicha declaración fue construida mediante un proceso participativo que involucró a más de 200 actores, incluyendo ministerios, organizaciones de la sociedad civil, académicas, académicos y personas expertas. Entre las prioridades definidas se encuentran la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la acción climática feminista y la protección de los derechos de las mujeres en el entorno digital. Desde esta perspectiva, se afirmó que el acceso a la vivienda, el desarrollo urbano inclusivo, la integración social y la atención a las personas en movilidad humana forman parte integral de la diplomacia feminista, y no constituyen excepciones dentro de este enfoque transversal de igualdad de género.

En el ámbito multilateral, se destacó el compromiso de Francia de reforzar su apoyo financiero y político a estas agendas, incluyendo el aumento significativo de sus contribuciones a ONU Mujeres y al Fondo de Población de las Naciones Unidas. A nivel nacional, se mencionó la existencia de un fondo específico de apoyo a

organizaciones feministas, activo desde 2020, que ha respaldado más de 1.400 proyectos en 75 países, con una inversión total de 250 millones de euros.

Finalmente, se resaltó la dimensión bilateral de la diplomacia feminista francesa, mencionando la firma de cartas de intención con Colombia en 2024, Chile en 2023 y Bolivia en 2025, así como la voluntad de ampliar estos acuerdos a otros países de la región. La intervención concluyó reafirmando el compromiso de Francia con Colombia, con la ciudad de Cali y con el fortalecimiento de la cooperación bilateral en distintos ámbitos, expresando el deseo de que el seminario genere intercambios fructíferos orientados a la acción colectiva y a la implementación efectiva del proyecto Mujeres Echando Raíces.

A continuación, intervino la Prefecta de Provincia de Pichincha, Paola Pabón, quien presentó el contexto del proyecto en Ecuador, implementado en la parroquia de Calderón, un territorio de rápida expansión urbana con cerca de medio millón de habitantes y una alta presencia de población migrante y desplazada. Señaló que las mujeres de Calderón sostienen el 77 % del trabajo no remunerado, enfrentan altos niveles de precariedad laboral y perciben ingresos muy inferiores al costo de la canasta básica. Recordó que el trabajo no remunerado representa el 19 % del PIB del país andino, pese a carecer de reconocimiento económico, social y jurídico, y subrayó que la pobreza y la desigualdad tienen rostro de mujer, en especial en zonas rurales e indígenas. Enfatizó que el 64 % de las mujeres de Pichincha ha vivido algún tipo de violencia y que los femicidios ocurren con una frecuencia alarmante, agravados por un contexto de creciente inseguridad y control territorial por parte de actores armados.

La prefecta expuso las políticas que la provincia viene implementando para enfrentar estas desigualdades: una red de doce Centros de Protección Integral de Derechos, una línea telefónica de emergencia, servicios itinerantes para zonas apartadas, escuelas populares feministas para la formación de lideresas comunitarias y un sistema provincial de cuidados que atiende a 70 000 mujeres al año. También destacó el programa "Por ti Mujer", que facilita el acceso a servicios de salud general y ginecológica por un costo mínimo y brinda atención gratuita mediante ferias comunitarias. Explicó que el enfoque es siempre colectivo, reconociendo la fuerza de las redes de mujeres en la detección, prevención y acompañamiento de casos de violencia. En este sentido, señaló que el proyecto MERA fortalece y complementa estos esfuerzos al integrar vivienda segura, cuidados, prevención de violencias y participación comunitaria.

Por último, agradeció el apoyo de AFD y Expertise France, así como la cooperación francesa en el desarrollo del observatorio de políticas públicas con enfoque de género en Pichincha. Reafirmó el compromiso de trabajar desde los gobiernos locales para generar políticas más cercanas, pertinentes y sensibles a la realidad de las mujeres, sin reproducir desigualdades estructurales. Cerró su intervención destacando que el liderazgo femenino basado en el cuidado, la justicia y la comunidad constituye una forma transformadora de ejercer poder.

Paneles Temáticos
Panel 1

Introducción general:

- **Presentación general proyecto MERA**, Jackeline Rojas, Directora de programa para Colombia y Ecuador.
- **Repensar la estrategia Housing First, con perspectiva de género** – Marie-Dominique de Suremain (Expertise France).

Panel 2

Avances del Proyecto MERA en Pichincha y Cali:

- **Avance del proyecto y retos de implementación en Pichincha,** Yubari Valero, AVSI.
- **Avance del proyecto y retos de implementación en Cali,** Carolina Arias, Fundación Sidoc.
- **Acciones desde la Secretaría de Vivienda de la Alcaldía de Cali,** María del Mar Mozo, Secretaría de Vivienda, Alcaldía de Cali

---

Panel 3

Proyectos Internacionales de integración de la población venezolana en Colombia y Ecuador

- **Transformación estratégica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: del hábitat biodiverso al arrendamiento solidario**, Rosa Elena Espitia Riaño, directora de Inversiones en Vivienda de Interés Social (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Colombia).
- **Ciudades incluyentes en la práctica: experiencias en vivienda, salud mental y protección con enfoque de género en Quito.** Diana Montero-Medina (Académica, Ecuador).
- **Derecho a la vivienda y procesos participativos de mujeres migrantes.** Verónica Jaramillo Fonnegra. Investigadora Conicet, coordinadora de la especialización en Migración y Asilo (Argentina).

Panel 4

Desde la perspectiva de género: de la academia a la práctica en América Latina

- **Alternativas habitacionales para mujeres en situación de violencia basada en género: avances y desafíos hacia una política pública que garantice autonomía.** Leticia Benedet, Ministerio de Desarrollo Social, Sub directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Uruguay).
- **Perspectivas migratorias desde el Sur Global. La Respuesta pública para el acceso a derechos de las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en Uruguay.** Valeria España, Ministerio de Desarrollo Social, Directora Nacional de Protección Social, Uruguay.
- **Otras formas de habitar la ciudad, la política pública de Inquilinatos de Medellín.** Catalina Colorado, Sub Directora Poblacional del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed, Colombia).
- **Vivienda adecuada para ellas. Puerta de acceso a derechos y base para la igualdad.** Daniela Núñez Ruiz, coordinadora de Gestión del Conocimiento ONU-Hábitat (México, Centroamérica y Cuba).

Panel 5

Política pública de acceso a albergues y vivienda social en arriendo, y lucha contras las violencias de género en Francia

- ***La gestión nacional de la política pública de albergue y acceso a la vivienda en Francia.*** *Daniel Castro Torres (Francia), Experto en gestión de políticas públicas de acceso a la vivienda. DIHAL y Samu Social.*

- **La acción de un departamento francés para el acceso de mujeres migrantes a albergues y viviendas arrendadas.** Flora Autefabe, Sub Directora de Prevención y Acción social de la Seine-Saint-Denis (Francia).
- **Funcionamiento, misiones y los aprendizajes del Observatorio de violencias de Género,** Maira Topall, responsable de relaciones internacionales del Observatorio de Violencias de Género del Departamento de Seine-Saint-Denis.

Panel 6

Mujeres en la construcción y autoconstrucción de sus viviendas

- **Empoderamiento de mujeres constructoras.** Pastora Zuñagua Mamani, coordinadora de proyectos Red Hábitat (Bolivia). Con el testimonio de Lidia Romero, maestra de obra.
- **Imparables: mujeres que transforman.** Beatriz Cobo, subdirectora del Centro de la Construcción del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) del Valle, Colombia. Con el testimonio de Angela Ospina Prado.



Panel 1
Introducción general



JACKELINE ROJAS
Directora de Programa MERA para Colombia y Ecuador, Expertise France, Bogotá, Colombia



MARIE DOMINIQUE DE SUREMAIN
Experta en género y hábitat sostenible, Francia

El primer panel del seminario inició con un saludo a las instituciones y organizaciones que hacen posible la ejecución del proyecto Mujeres Echando Raíces (MERA), una iniciativa binacional que se desarrolla en Cali, Colombia, y Quito, Ecuador. Se destacó la participación de las organizaciones socias responsables de los tres componentes del proyecto: vivienda digna y aseguramiento, autonomía económica y autonomía personal. Entre ellas, se mencionó a Fundación Sidoc, Compromiso Valle, Fundación Carvajal, la Cámara de Comercio de El Carmen, Funder, Pichincha Humana y el equipo de Derechos y Movilidad Humana de la Prefectura de Pichincha (Ecuador), así como a la Fundación AVSI, ejecutora del componente de vivienda en Quito. Todas fueron reconocidas por su presencia y por su rol clave en la implementación.

El panel se centró en el enfoque del proyecto, destinado a acompañar la integración de mujeres migrantes y sus familias, priorizando tres ejes definidos durante el estudio de factibilidad realizado en coordinación con autoridades locales y nacionales: acceso a un techo seguro, inserción socioeconómica y prevención de violencias, incluyendo salud sexual y reproductiva, y el empoderamiento integral de las mujeres. Jackeline Rojas, directora de programa para Colombia y Ecuador, abrió la sesión contextualizando el proyecto y su alcance regional. Explicó que éste parte del principio de "vivienda primero" como punto de arranque para generar autonomía, y estabilidad. Subrayó que la iniciativa, financiada por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y ejecutada por Expertise France en alianza con sus socios de Cali y Pichincha, busca convertir el conocimiento técnico en acción, promoviendo intercambios entre Francia, Colombia, Ecuador y otros países participantes.

J. Rojas recordó que el proyecto surge ante una de las crisis migratorias más significativas de la región: más de 7 millones de personas venezolanas han salido de su país, de las cuales casi 6 millones se han asentado en América Latina. Señaló que las mujeres migrantes enfrentan riesgos específicos, con mayores probabilidades de sufrir violencias basadas en género durante los desplazamientos y en los países de acogida. El proyecto, con una duración de tres años y un presupuesto de 7 millones de euros, tiene como propósito fortalecer políticas públicas sostenibles mediante alianzas articuladas con el sector público, privado y social, bajo lineamientos de género, gobernanza, interseccionalidad, y de integración en las comunidades de acogida, sumando monitoreo y comunicación.

En su intervención, J. Rojas describió los cuatro componentes del proyecto y sus líneas de acción: acceso a un techo seguro en alquiler mediante diferentes mecanismos, entre otros subsidios y mejoramiento de las viviendas; formación para empleo y emprendimiento con innovación social; prevención de violencias basadas en género, promoción de derechos sexuales y reproductivos y apoyo a las organizaciones de mujeres; y un componente de expansión y capitalización. Presentó además las metas planteadas: beneficiar a 1000 mujeres en movilidad humana y de comunidades de acogida con mecanismos de acceso a un techo seguro, alcanzar 650 mujeres formadas en habilidades económicas, involucrar a 2000 mujeres en acciones de prevención de violencias y sensibilizar a 4000 personas en las comunidades de acogida. Destacó que el proyecto es integral y requiere una coordinación entre componentes y actores y que las alianzas institucionales han permitido avanzar hacia una implementación articulada, tanto en Cali como en Quito.

Resaltó que el proyecto ha iniciado lanzado oficialmente en junio del 2024 y que el seminario se ha organizado para profundizar la reflexión y orientar la implementación del componente más experimental en torno al acceso a un techo seguro en alquiler para las mujeres venezolanas y también para mujeres en situación de vulnerabilidad en las comunidades de acogida de cada país. En este sentido, los aportes teóricos sobre género, movilidad y hábitat y de políticas públicas afines en varios países de américa latina y Francia, serán de gran interés para seguir estructurando el proyecto MERA. Al tiempo que se espera que el intercambio sea también provechoso para las y los participantes que han compartido sus experiencias.

A continuación, la experta Marie Dominique de Suremain profundizó sobre la estrategia "Housing First" y su adaptación a contextos latinoamericanos con enfoque de género en el proyecto MERA. Explicó que este enfoque nace en el contexto de políticas públicas habitacionales dirigida a habitantes de calle, principalmente hombres, proponiéndoles un acceso inmediato a una vivienda alquilada estable como acelerador de su integración socioeconómica, contrastando con modelos llamados "escalera" basados en un acceso a diferentes tipos de refugios temporales durante procesos graduales. Presentó evidencia de estudios comparativos que demuestran mejores resultados en autonomía, salud mental, acceso a derechos y estabilidad laboral cuando se garantiza primero la vivienda.

Abordando la situación de las personas en situación de calle en Colombia y Ecuador, la ponente mostró que entre ellas hay mujeres migrantes, pero que en términos cuantitativos suelen ser subrepresentadas en datos oficiales, porque tratan de evitar la permanencia en la calle. En estudios realizados en Francia, se ha encontrado una creciente presencia de mujeres migrantes jóvenes con hijos menores, y se ha observado de la misma manera que las mujeres sin techo permanente suelen esconderse en viviendas degradadas, o donde "amigos" porque la calle representa para ellas un riesgo extremo de violencia sexual. Señaló que la aparente prevalencia de hombres en la calle y la invisibilidad de las mujeres, limitan la capacidad de diseñar políticas adaptadas a ellas, tales como la prevención de las violencias de género. Por ello, enfatizó la necesidad de producir datos con perspectiva de género, de visibilizar discriminaciones directas e indirectas y reconocer también las capacidades desarrolladas por las mujeres migrantes en sus trayectorias de movilidad.

Asimismo, incorporó un análisis histórico de los movimientos urbanos y feministas latinoamericanos, subrayando que las mujeres han sido motores muy precoces en la migración campo–ciudad, especialmente en la autoconstrucción de barrios populares y en la creación de organizaciones comunitarias en varios campos del cuidado. Recordó que gran parte del hábitat popular latinoamericano ha sido construido con una fuerte contribución de las mujeres, quienes impulsaron luchas por condiciones mejoradas de vivienda, servicios básicos (como el agua), y seguridad, compensando sus ingresos precarios y las fallas de las infraestructuras con jornadas domésticas alargadas y trabajo comunitario intenso (la triple jornada). Sin embargo, en el momento de la legalización de los barrios informales, ellas han podido perder parte del control de la propiedad, cuando no han sido asesoradas en el campo del derecho de familia.



Fuente: ponencia Marie-Dominique de Suremain 2025

MD de Suremain propuso mirar el proyecto MERA a la luz de estos aprendizajes históricos: reconocer el aumento de la jefatura femenina de hogar en medio de la diversidad de arreglos familiares, considerar la titularidad de los contrato de arriendo como señal de autonomía y capacidad de decisión, incorporar asesoría jurídica, reconocer el trabajo de cuidado como aporte económico y comprender que la violencia intrafamiliar más que la pobreza en sí, es el principal factor de morosidad en el pago de los arriendos. Subrayó que el derecho a la ciudad para las mujeres en su diversidad no se limita a la vivienda, sino también al derecho a circular sin miedo, a acceder a infraestructura de cuidado y a vivir libres de violencias.

Finalmente, llamó a diferenciar entre necesidades prácticas y estratégicas de género. Un subsidio de arriendo, y un contrato formal señaló, responde a la necesidad práctica inmediata, pero la transformación estructural y estratégica empieza cuando se previenen los desalojos bajo amenaza de sextorsión, se fomenta la corresponsabilidad de los hombres, y nuevas masculinidades. Cerró destacando la importancia de incluir herramientas feministas interseccionales como historias de vida de mujeres y hombres en movilidad humana y de comunidades de acogida, cartografía social del espacio y tiempos y diagnósticos compartidos para construir un enfoque transformador que haga visibles los usos, apropiaciones y propuestas de cambio hacia territorios seguros, sin xenofobia ni homofobia.



Panel 2

Avances del proyecto MERA en la provincia de Pichincha (Ecuador) y en Santiago de Cali (Colombia)



YUBARI VALERO

Directora de la Fundación AVSI, ejecutora del componente de Vivienda segura de MERA en Ecuador



CAROLINA ARIAS

Coordinadora del componente de Vivienda segura de MERA en Colombia, Fundación SIDOC



MARÍA DEL MAR MOZO

Secretaria de Vivienda, Alcaldía de Cali, Colombia

La intervención de Yubari Valero, representante de la Fundación AVSI y ejecutora del componente de vivienda del proyecto MERA en Ecuador, se centró en exponer los avances, estrategias y desafíos del trabajo realizado en Quito, hasta la fecha, después de un poco más de un año de ejecución del componente de acceso a un techo seguro, para mejorar el acceso a alquileres dignos para mujeres migrantes y comunidades de acogida.

Y. Valero inició con un testimonio personal que evidencia las barreras estructurales y la discriminación que enfrentan las personas migrantes para acceder a una vivienda en Ecuador. Relató cómo, pese a contar con estudios de posgrado, empleo estable y residencia permanente, fue rechazada en tres oportunidades por arrendadores al enterarse de su nacionalidad venezolana. Su experiencia permitió situar la complejidad del problema y las múltiples discriminaciones que enfrentan mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad.

A partir de este contexto, presentó el objetivo central de componente de vivienda del proyecto MERA: reducir las barreras de acceso a viviendas de alquiler para mujeres migrantes, a través de un enfoque integral de protección y género. Subrayó que el proyecto no se dedica a "dar viviendas", sino que trabaja en el desarrollo de estrategias que desmonten los obstáculos que impiden un acceso seguro, digno y no discriminatorio.

El modelo de intervención se basa en tres pilares: articulación territorial con comunidades y actores locales; coordinación institucional, evitando duplicaciones y fortaleciendo programas ya existentes del Estado y de gobiernos locales; promoción de condiciones habitacionales seguras y adecuadas, colocando énfasis tanto en la vivienda como en la relación entre arrendadores y arrendatarias.

Explicó que el primer objetivo se concentra en la asistencia integral a mujeres migrantes. Para ello, se trabaja con perfiles diferenciados que consideran situación migratoria, redes de apoyo, condiciones económicas, experiencias de violencia y características de las viviendas disponibles.

A partir del diagnóstico, se definen mecanismos de apoyo que incluyen: asistencia financiera, gestionada mediante sistemas accesibles para sortear las barreras de la irregularidad migratoria; kits de habitabilidad, esenciales para mujeres que provienen de albergues o situaciones de emergencia; acompañamiento y orientación, reconociendo que la información es una herramienta de protección.

Dentro de estas acciones, un componente clave ha sido la creación y sensibilización de una red de arrendadores aliados, orientada a fortalecer el rol de quienes pueden garantizar espacios de vivienda seguros y libres de discriminación. Los retos encontrados en la constitución de esta red serán profundizadosdurante la una de las mesas de trabajo anunciadas para el día siguiente.

Respecto al segundo objetivo, Y. Valero explicó que el proyecto actúa a nivel comunitario, principalmente en sectores como Calderón, una parroquia de Quito, donde existen organizaciones locales activas en el acompañamiento a mujeres. El programa ha apoyado y fortalecido capacidades mediante talleres de liderazgo y prevención, dirigidos a actores territoriales que acompañan a mujeres, niñas, niños y adolescentes. La intervención sobre el mejoramiento físico de las viviendas donde viven las inquilinas, está prevista en la etapa siguiente de implementación del proyecto.

En este marco, invitó y pidió la intervención de Catalina Solano, lideresa de una comunidad de acogida, quien relató cómo el proyecto transformó la dinámica organizativa de su sector. Solano destacó que MERA fue el primer programa que les habló de vivienda digna y que, gracias al fortalecimiento de redes de mujeres, han logrado generar espacios seguros, acompañar a sobrevivientes de violencia y ofrecer alternativas reales a quienes necesitan salir de situaciones de riesgo. Subrayó que "el primer espacio seguro para una mujer es su vivienda" y que la red

comunitaria funciona hoy como soporte para proteger a otras mujeres en búsqueda de seguridad.

Y. Valero cerró su intervención destacando que ninguna estrategia puede sostenerse si actúa de forma aislada; el acceso a vivienda digna para mujeres migrantes requiere de un entramado que articule instituciones públicas, actores comunitarios, cooperación internacional y redes solidarias. Agradeció especialmente el apoyo financiero que hace posible alcanzar los objetivos del proyecto.

Carolina Arias, coordinadora de proyectos de la Fundación Sidoc y responsable del componente de vivienda del proyecto MERA en Cali, presentó los avances, aprendizajes y retos de la implementación territorial en la Comuna 15 a la fecha de seminario. Inició destacando la trayectoria de su organización, que cuenta con más de dos décadas de trabajo comunitario en zonas de alta vulnerabilidad, especialmente en intervenciones orientadas a reducir la violencia contra las mujeres.

Gracias al impulso de la diplomacia feminista del Gobierno francés y a la experiencia acumulada de la fundación, se consolidó la implementación local del proyecto MERA, adaptado a las características sociales y urbanas de Cali.

C. Arias contextualizó el territorio de intervención: en la Comuna 15, ubicada en el suroriente de la ciudad, el 91 % de la población vive en pobreza o pobreza extrema y el 56 % son mujeres. El territorio incluye siete barrios formales y nueve asentamientos humanos de desarrollo incompleto, zonas que requieren atención urgente por parte de la institucionalidad y los actores comunitarios. Un diagnóstico permitió focalizar el trabajo en cuatro barrios —Comuneros I, Vallado, Barrio Mojica y Laureano Gómez— donde confluyen tres factores críticos: alta presencia de población migrante venezolana, elevados índices de violencia contra las mujeres —en especial violencia sexual e intrafamiliar— y fuertes condiciones de precariedad económica.



Fuente: Presentación Carolina Arias, Fundación Sidoc (2025).

Un elemento contextual relevante es que la Comuna 15 alberga el primer ecosistema de cuidados de la urbe, denominado Cuidarte, ubicado en el barrio Laureano Gómez, donde avanza la construcción de la Casa Matria de Oriente, una infraestructura emblemática de atención a mujeres. El proyecto MERA se articula activamente con esta iniciativa y con las instituciones locales.

El objetivo del componente de vivienda en Cali es facilitar el acceso a alquileres dignos y seguros para mujeres migrantes con vocación de permanencia, incorporando también a vecinas como parte de los procesos de integración comunitaria. La intervención se desarrollará en dos cohortes de nueve meses cada una. En la primera, se atendió a 275 mujeres, en su mayoría cuidadoras de niñas, niños, adultos mayores o personas con discapacidad. Aproximadamente, el 60 % son migrantes y el 40 %, locales, con una mayoría de mujeres adultas y una proporción menor de jóvenes.

Para mejorar las condiciones de acceso a la vivienda, el proyecto trabaja tanto con las mujeres como con los propietarios. Se han sensibilizado a 254 arrendadores sobre los criterios mínimos de vivienda digna, orientándolos en prácticas de arriendo seguras y no discriminatorias y promoviendo mejores condiciones para las familias.

El modelo incluye un proceso formativo para las mujeres, basado en enfoque de género y derechos, que fortalece la autonomía, el liderazgo, la comunicación, la resolución de conflictos y la participación social. En paralelo, se implementó una estrategia innovadora denominada "Tiempo de juego", que consiste en acompañar a los hijos e hijas de las participantes a través de actividades pedagógicas y lúdicas, operadas por un equipo de enlaces territoriales —mujeres y hombres migrantes—, con el fin de reducir cargas de cuidado y asegurar la permanencia de las mujeres en los talleres.

Otro eje clave es la formación técnica en el campo de la construcción En alianza con el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia), se implementó el programa "Imparables: mujeres que transforman", que capacita a las participantes en oficios históricamente masculinizados como construcción, estuco, pintura y estructuras en concreto. Esta estrategia no solo amplía las oportunidades laborales de las mujeres, sino que también impulsa su presencia en nichos donde el sector empresarial ha empezado a reconocer su responsabilidad, dedicación y calidad de desempeño.

El componente de vivienda digna y segura se concretara en varios tipos de beneficios o herramientas según las necesidades encontradas: un subsidio temporal de arriendo, que permite a las mujeres estabilizar sus condiciones habitacionales y liberar recursos para formación, salud o educación; mejoramientos no estructurales, desarrollados en acuerdo con propietarios, que incluyen reparaciones menores en puertas, cocinas, baños o elementos que afectan la seguridad física de mujeres, niñas y niños. Ambas intervenciones se complementan con acciones psicosociales que permiten a las mujeres reorganizar y reapropiarse de su espacio, acompañado en algunos casos por kits básicos de mobiliario.

C. Arias también identificó retos relevantes. La Comuna 15 presenta una demanda muy alta de vivienda en alquiler, con una oferta muy limitada, lo que provoca que los arriendos disponibles se ocupen en pocas horas, evidenciando la alta demanda que existe. Otro desafío fue la implementación de pólizas de arrendamiento, que debía ofrecer una garantía o un seguro, pero encontró barreras como la necesidad de contar con un documento de identificación y las exigencias de contratos formales y estabilidad laboral, que muchas mujeres no pueden cumplir. Esto obligó a rediseñar el beneficio y priorizar apoyos más flexibles, como los kits de mobiliario.

Finalmente, C. Arias destacó un logro fundamental: el funcionamiento del Comité de Aprobación de Beneficios, un espacio articulado por las tres contrapartes del proyecto MERA y por la Alcaldía de Cali, a través de las secretarías de Vivienda y Bienestar Social. Este comité ha permitido decisiones consensuadas, análisis profundos de cada caso y respuestas oportunas a las necesidades de las mujeres participantes.

La intervención cerró con una frase que resume la esencia del proceso comunitario: "cuando una mujer encuentra un lugar donde echar raíces, florecen nuevas formas de vivir con dignidad".

La secretaría de Vivienda Social de Cali, María del Mar Mozo, inició su intervención destacando la importancia del proyecto MERA para la ciudad y para las mujeres que enfrentan barreras para acceder a vivienda digna. Señaló que, al inicio de la actual administración, uno de los principales desafíos fue la ausencia de datos locales actualizados; la ciudad solo contaba con información nacional, lo que dificultaba la toma de decisiones. Por ello, se creó el Observatorio de Vivienda Social y Hábitat, herramienta que hoy permite comprender con precisión el panorama habitacional del distrito.

A partir del análisis de los 877 000 hogares registrados en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben), el equipo identificó que 209 000 hogares presentan déficit habitacional, tanto cualitativo como cuantitativo. De ellos, 27 000 tienen déficit cuantitativo —es decir, requieren una vivienda nueva— y alrededor de 182 000 sufren déficit cualitativo, lo que implica condiciones inadecuadas en la vivienda existente. Estas cifras, afirmó, muestran la magnitud del reto, especialmente en una ciudad receptora de migración interna y extranjera, con 193 asentamientos humanos de desarrollo incompleto.

Ante este contexto, M.M. Mozo reiteró que el compromiso del alcalde Alejandro Eder con el sector vivienda es total. Dentro del plan de financiación "Invertir para Crecer", aprobado por 3,5 billones de pesos, 300 000 millones se destinan al sector vivienda. De estos, 200 000 millones financiarán acciones directas para reducir el déficit cualitativo y cuantitativo en las zonas que más lo requieren. Con estos recursos, se ejecutarán más de 1500 reparaciones de vivienda y se impulsarán proyectos distritales en suelos que la administración está gestionando, pues Cali cuenta con poca tierra pública disponible.

Explicó también la implementación del sistema denominado "Tu Meta", que permitirá a las familias recibir orientación integral, registrar su demanda habitacional y vincularse a los proyectos distritales. Esta estrategia busca articular oferta pública y demanda real, para que las personas que más necesitan vivienda digna logren acceder a ella.

M.M. Mozo señaló que, según los datos del observatorio, las comunas 6, 13, 14, 15 y 21 concentran la mayor parte del déficit habitacional. Subrayó que los recursos públicos no serán suficientes para transformar de manera estructural estas realidades, por lo que la cooperación internacional —incluida la francesa, que respalda el proyecto MERA— es crucial para generar impactos profundos y sostenibles.

Destacó que este último programa aborda la vivienda no como una simple intervención física, sino desde una perspectiva integral, con énfasis en empleo, bienestar familiar y autonomía de las mujeres.

La secretaria explicó que esta cooperación permitirá efectuar una consultoría para revisar la normativa local y evaluar ajustes que permitan desarrollar programas para familias arrendatarias. En la actualidad, el marco vigente exige que los beneficiarios de mejoras sean propietarios, lo que excluye a un grupo que representa el 59 % de los hogares caleños y que además concentra la mayor proporción del déficit cualitativo. Esta restricción normativa, dijo, va en contravía de las necesidades reales de la ciudad. La consultoría buscará identificar mecanismos legales que permitan implementar políticas de mejoramiento en viviendas arrendadas, tomando como referencia modelos como el de MERA.

En su mensaje final, M.M. Mozo agradeció al gobierno francés, a Expertise France y a las entidades cooperantes, y felicitó a las 240 mujeres beneficiarias del proyecto, destacando que este apoyo abre puertas a transformaciones profundas en su vida cotidiana. Reafirmó además el compromiso del distrito con la legalización urbana de 40 asentamientos de los 193 existentes, lo que permitirá que estas zonas, hoy informales, puedan acceder a inversión pública y a programas de vivienda y mejoras.

Intercambio con el público

Durante la ronda de preguntas, una representante del Instituto Social de Vivienda de Medellín expresó la dificultad normativa para realizar reparaciones en viviendas arrendadas y consultó cómo el proyecto MERA lograba intervenir estas unidades. La respuesta, brindada por una representante de la Fundación AVSI en Quito, explicó que las organizaciones de la sociedad civil pueden ejecutar intervenciones gracias a su capacidad de focalización comunitaria y a la firma de convenios con los propietarios, donde se garantiza que la familia arrendataria no será desalojada ni enfrentará incrementos abusivos en el alquiler. Este convenio condiciona la intervención y protege simultáneamente a la familia beneficiaria y al propietario, generando acuerdos formales que permiten mejorar viviendas utilizadas por mujeres en situación de vulnerabilidad.

Luego, una delegada comunitaria planteó la inquietud sobre la posibilidad de acceso a vivienda nueva para lideresas, especialmente considerando los predios en extinción de dominio. M.M. Mozo respondió que su Secretaría está revisando estos suelos administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con el fin de estructurar proyectos de vivienda en arriendo social y otras modalidades innovadoras. Además, ofreció acompañamiento directo para orientar a las lideresas en las rutas y requisitos para acceder a los programas distritales existentes.

La sesión concluyó con agradecimientos a las panelistas, invitación a un receso y el anuncio de la continuación del evento conforme a la agenda programada.



Panel 3

Proyectos internacionales de integración de la población venezolana en Colombia y Ecuador





ROSA ELENA ESPITIA RIAÑOS

Directora de inversiones en vivienda de interés social, Ministerio de vivienda y desarrollo urbano de Colombia

DIANA CAROLINA MONTERO MEDINA

Especialista en género y migración

Rosa Elena Espitia, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, presentó los avances y aprendizajes del programa de arrendamiento solidario, una iniciativa que ofrece subsidios temporales al alquiler para hogares migrantes y colombianos en situación de vulnerabilidad. El programa otorga coberturas de hasta el 30 % del canon de arriendo por seis meses y hasta el 45 % por doce meses, financiadas mediante donaciones del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

Esta intervención cuenta con aliados públicos y privados, entre ellos gestores inmobiliarios y entidades territoriales, que operan en distintos municipios del país. La política está dirigida principalmente a hogares migrantes venezolanos con ingresos de hasta dos salarios mínimos y que cuenten con Permiso por Protección Temporal (PPT) o cédula de extranjero. Se verifica además que los beneficiarios no sean propietarios ni hayan recibido subsidios previos, para asegurar un uso equitativo del recurso público.



Fuente: Presentación Rosa Elena Espitia (2025).

Los resultados obtenidos en ciudades como Cali, Bucaramanga, Quibdó, Cúcuta, Santa Marta, Arauca, Pereira, Yopal y Saravena, reflejan su impacto humano: cada subsidio representa una historia de protección, estabilidad y convivencia comunitaria. El programa, además de ser una solución habitacional temporal, se ha convertido en una puerta de entrada para la integración socioeconómica y la cohesión social. Entre los principales aprendizajes se destaca que cada territorio exige estrategias diferenciadas, pues no es lo mismo trabajar en Cali que en Arauca; por ello, la articulación con autoridades locales, la escucha activa y la planificación conjunta han sido pilares centrales. La integración social, se subrayó, no se decreta, se construye mediante intervenciones adaptadas a la realidad urbana y social de cada lugar.

La operatividad del programa se desarrolla en dos fases. En la primera, se completa el registro y la asignación, identificando y validando a los hogares más vulnerables con herramientas de información territorial que permiten priorizar a quienes más lo necesitan. La segunda fase corresponde a la formalización del arriendo y al acompañamiento social. Aquí se establecen contratos formales entre familias colombianas y migrantes, con pagos directos y con el respaldo de gestores inmobiliarios, entidades locales y el Ministerio, en un esquema de gobernanza participativa donde concurren Estado, sociedad y cooperación internacional.

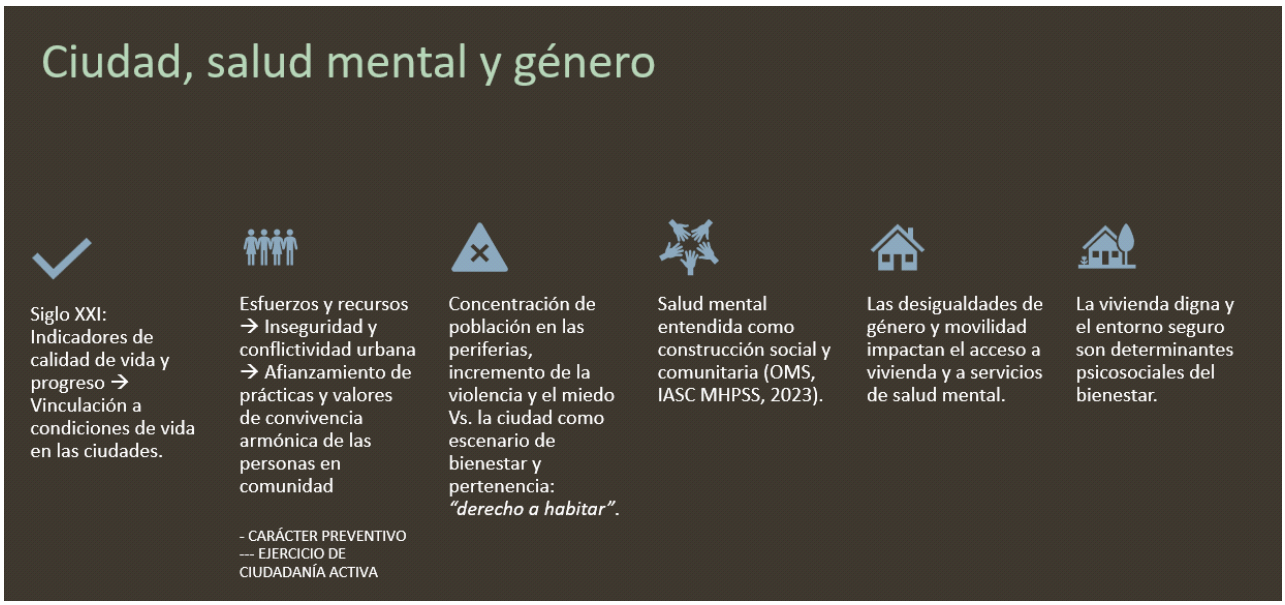
El programa incorpora un enfoque de género fundamental: más del 60 % de los hogares beneficiarios están encabezados por mujeres migrantes, muchas con hijos menores o víctimas de violencia. Para ellas, la vivienda representa no solo un techo, sino un espacio de protección, autonomía y reconstrucción personal. El apoyo técnico del Banco Mundial y del BID ha sido determinante para fortalecer estándares, enfoques diferenciales y mecanismos de priorización, lo que ha contribuido a mejorar la calidad de las políticas públicas del sector.

Finalmente, se enfatizó que este programa forma parte de un proceso más amplio de transformación estructural de la política de vivienda en Colombia, que sitúa la vida, la inclusión y el territorio en el centro. Garantizar un techo seguro, se concluyó, es una forma concreta de generar esperanza, arraigo y oportunidades. Desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se ratificó el compromiso de seguir construyendo ciudades equitativas y sostenibles, donde cada familia, migrante o colombiana, pueda echar raíces y proyectar un futuro digno.

La intervención de la especialista Diana Carolina Montero Medina inició con un reconocimiento a la importancia de espacios diversos y seguros para dialogar sobre movilidad humana, género y comunidad. Subrayó el valor de la presencia de cada vez más hombres en estos encuentros, destacando que la construcción de espacios inclusivos requiere corresponsabilidad. También señaló que estos eventos permiten fortalecer vínculos entre mujeres, lazos que considera fundamentales para la práctica cotidiana de la inclusión y el acompañamiento comunitario.

La expositora situó su voz desde una perspectiva personal y profesional: mujer venezolana y ecuatoriana, con años de trabajo en Quito, vinculada tanto a investigaciones en salud mental de mujeres migrantes y refugiadas como a intervenciones territoriales. Explicó que su experiencia directa proviene del proyecto Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias, financiado por la Union Europea, ejecutado por Onu Habitat y la OIM, en sectores del norte y sur de varias ciudades latinoamericanas, entre ellas en Quito, donde colaboró con lideresas comunitarias como Catalina, cuya trayectoria representa el protagonismo femenino en procesos locales.

D. Montero destacó que su análisis está anclado en tres dimensiones: movilidad humana, interseccionalidad y territorio. Enfatizó que ninguna práctica profesional se separa de nuestras identidades y trayectorias y que la producción de conocimiento está atravesada por quiénes somos. En este marco explicó que, en el siglo XXI, los indicadores de calidad de vida se vinculan principalmente con las condiciones urbanas, puesto que las ciudades concentran servicios, oportunidades y también tensiones propias de la desigualdad y la inseguridad.



Fuente: Presentación Diana Montero (2025).

Detalló el caso de Quito, una ciudad longitudinal donde los polos norte y sur concentran tanto población local como la mayor llegada de personas migrantes y refugiadas. Diferenció las experiencias de acogida y éxodo, señalando que quienes solicitan refugio suelen cargar historias de violencia extrema, tortura o desplazamientos forzados. Estas condiciones, sumadas a contextos de hacinamiento y precariedad, generan afectaciones significativas a la salud mental.

A partir de su investigación y trabajo de campo, presentó datos sobre estrés y salud mental en mujeres migrantes y refugiadas en Quito. Señaló que más del 60 % de los migrantes atendidos, y quienes acceden a servicios de salud mental, son mujeres. Esto refleja la construcción social del rol femenino como custodias del bienestar emocional familiar. Explicó que muchas redes de apoyo no surgen del Estado ni de organizaciones, sino del sostén cotidiano que brindan lideresas comunitarias: acompañan, traducen, ayudan a navegar trámites, activan rutas de protección y contienen emocionalmente a quienes recién llegan.

Compartió hallazgos sobre el rol de los espacios públicos: parques y áreas verdes reducen el estrés y favorecen el bienestar, en especial cuando son accesibles y seguras para mujeres. Subrayó la necesidad de equipamiento urbano con enfoque de género y políticas que atiendan las particularidades de barrios como Carapungo o Solanda, al norte y sur respectivamente, donde conviven liderazgos masculinos históricos con nuevos liderazgos femeninos migrantes que transforman la vida comunitaria.

D. Montero cerró su intervención presentando testimonios de mujeres que participaron en su investigación doctoral, quienes describen qué significa para ellas un "techo seguro". Sus respuestas se concentran en tres ejes: condiciones materiales básicas (infraestructura digna, acceso a servicios, ausencia de hacinamiento), protección frente a la violencia externa (seguridad del barrio) y protección frente a la violencia intrafamiliar. Para estas mujeres, un techo seguro es sinónimo de bienestar, dignidad y salud mental.

Intercambio con el público

A continuación, se abrió un espacio de preguntas. La primera intervención indagó sobre las otras formas de habitar que enfrentan mujeres migrantes recién llegadas. D. Montero explicó que, antes de poder arrendar, muchas recurren a espacios temporales, como albergues municipales o cuartos diarios en hoteles informales. Estos últimos, al no estar gestionados con criterios de protección, suelen ser inseguros para mujeres y niñas. De allí la importancia de fortalecer mecanismos de acompañamiento comunitario y de información accesible sobre rutas de apoyo.

Otra pregunta del público se refirió a las barreras documentales que impiden acceder a vivienda. D. Montero señaló que la documentación sigue siendo una de las principales dificultades, afectando tanto empleo como alquiler. Indicó que, aunque existen visas específicas como la de refugio, su desconocimiento es común en la población venezolana. Subrayó la necesidad de información clara, homologada y difundida en territorio, en especial por medio de liderazgos comunitarios que son quienes realmente logran que esa información llegue.

La intervención fue complementada por funcionarias del gobierno colombiano, del panel previo, quienes explicaron que las barreras documentales también existen en Colombia, pero que se han establecido canales de seguimiento social, articulación interinstitucional y gestión comunitaria para facilitar el acceso a subsidios habitacionales que requieren ciertos requisitos formales. Añadieron que, para dar sostenibilidad a estas políticas sin depender exclusivamente de la cooperación internacional, el gobierno ya cuenta con decretos y normas que habilitan asignación presupuestaria permanente para estos programas.

El panel concluyó con un reconocimiento a las ponentes y a la necesidad de fortalecer políticas de vivienda e integración con enfoque de género, comunitario y territorial.



Panel 4

Desde la perspectiva de género: de la academia a la práctica en América Latina



VERÓNICA JARAMILLO FONNEGRA

Abogada, especialista en género y migración, CONICET, Argentina



LETICIA BENEDET

Subdirectora del Instituto Nacional de las Mujeres, Uruguay



VALERIA ESPAÑA

Directora de Protección social de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Uruguay



CATALINA COLORADO MESA

Subdirectora Poblacional del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED), Alcaldía de Medellín, Colombia



DANIELA NUÑEZ RUIZ

Coordinadora de Gestión del Conocimiento, ONU-Habitat México, Cuba y Centroamérica

La abogada y especialista Verónica Jaramillo se presentó como colombiana residente en Argentina desde hace 18 años, con trayectoria de trabajo con mujeres migrantes principalmente bolivianas, en el área metropolitana. Su exposición se centró en el rol fundamental de estas compañeras en la producción de la ciudad y en la construcción del hábitat, tanto desde las organizaciones sociales como desde la academia, la política y la gestión pública. Explicó la importancia de aplicar el enfoque interseccional de género en los análisis de vivienda. Subrayó tres dimensiones centrales: Lo territorial, al reconocer la diversidad de contextos donde viven las mujeres; lo contextual, considerando historia, edad, color de piel y situación socioeconómica; la pluralidad de experiencias, evitando hablar de "la mujer" como categoría homogénea.

Destacó que comprender de dónde provienen las poblaciones migrantes, sus prácticas, saberes, formas de vida y necesidades, es esencial para diseñar políticas de vivienda pertinentes. No solo se trata de recibir a migrantes, sino de reconocer las historias y capacidades que aportan a las comunidades receptoras.

Sobre interseccionalidad, vulnerabilidad y agencia, V. Jaramillo insistió en que la vulnerabilidad no es una condición fija, sino situacional. Una mujer migrante puede sentirse vulnerable en ciertos momentos del proceso migratorio, pero en su comunidad

puede ser líder, con poder de palabra y capacidad organizativa. Entender estos matices es clave para la investigación, la gestión pública y el diseño de políticas.

Asimismo, destacó el papel de las mujeres en la producción cotidiana del territorio: sostienen la vida, generan comunidad y participan activamente en la transformación urbana. En relación a migración y vivienda, recordó que Argentina es un país con una larga historia de movilidad humana. Aunque la población migrante actual representa alrededor del 4 %, está sobrerrepresentada en barrios con déficit habitacional, donde se combinan falta de documentos, dificultades de acceso a derechos y precariedad del hábitat.

Sin embargo, muchas migrantes poseen conocimientos previos sobre derechos y propiedad. Por ejemplo, en el caso venezolano influyen en sus luchas actuales por acceder a vivienda. A la vez, muchas expresan haber dejado mejores residencias en sus países de origen y deben enfrentar condiciones más precarias, viviendo entre el duelo por lo perdido y la necesidad de reconstruir un lugar habitable.

V. Jaramillo presentó varios ejemplos de procesos de urbanización en villas de Buenos Aires y el área metropolitana, donde las migrantes han tenido un rol destacado. Desde comedores comunitarios hasta asambleas vecinales y participación en comunas, estas mujeres han impulsado políticas públicas, acompañado procesos censales y actuado como mediadoras entre Estado, academia y comunidad.

Mostró fotografías de barrios que pasaron de viviendas extremadamente precarias a proyectos de urbanización con mejoras sustanciales en infraestructura y habitabilidad. Señaló que estos avances fueron posibles gracias a la articulación entre Estado, organizaciones sociales, universidades y la comunidad migrante. Un caso emblemático fue el barrio Lomas de Zamora, donde las mujeres crearon su propio mapa del barrio con una nomenclatura urbana para garantizar la llegada del correo y la documentación. Este gesto, relató, se convirtió en el primer acto de reconocimiento del barrio y en la base para posteriores procesos de regularización.



Ejemplo de mapa sobre problemáticas realizado en el marco de una cartografía social

Importancia de los procesos participativos

La participación activa de **mujeres migrantes** en el acceso a la vivienda es esencial para avanzar en derechos humanos. Estos procesos permiten la creación de comunidades **sostenibles** y justas, donde las mujeres son protagonistas de su propio desarrollo. En este contexto, su voz y liderazgo son fundamentales para garantizar un hábitat digno y promover una **sociedad inclusiva** que respete la diversidad y la equidad.

Fuente: Presentación Verónica Jaramillo (2025).

Entre las herramientas usadas por las mujeres para incidir en el territorio mencionó: espacios de encuentro y redes de apoyo, fotografía social para diagnóstico, cartografía social participativa, acompañamiento de asambleas y relevamientos censales, exigencia de presencia estatal en salud, educación y trámites municipales.

Estas metodologías permitieron visibilizar barreras reales de acceso a derechos. Una cartografía social reciente mostró, por ejemplo, que todos los servicios públicos quedaban fuera del barrio, limitando la atención y la movilidad de las mujeres. A partir de este diagnóstico, se impulsó un proceso de identificación e inscripción de las tierras del barrio, donde el municipio realizó un censo e inició la urbanización con alcantarillas, pavimentación y la construcción de viviendas dignas.

V. Jaramillo concluyó que la participación activa de las mujeres migrantes es indispensable para el avance de los derechos humanos y la construcción de territorios más sostenibles, justos y habitables. Sus liderazgos fortalecen los procesos de organización comunitaria y permiten transformar de manera efectiva las condiciones del hábitat.

A continuación, el caso uruguayo se expuso a través de dos intervenciones complementarias que permitieron comprender, por un lado, la arquitectura institucional del país en materia de derechos de las mujeres y, por otro, las formas concretas en que estas políticas se traducen en dispositivos de acceso a vivienda para mujeres en situación de violencia basada en género.

La primera presentación estuvo a cargo de Leticia Benedet, subdirectora del Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay (Inmujeres), quien abrió su intervención agradeciendo la invitación y destacando la relevancia del espacio para seguir profundizando en políticas públicas que articulan vivienda, género y autonomía. Su exposición se centró en el Programa de Alternativas Habitacionales para Mujeres en Situación de Violencia Basada en Género, una iniciativa que Inmujeres desarrolla en coordinación con el Ministerio de Vivienda y otros organismos del Estado uruguayo. El propósito del programa, señaló, es ofrecer soluciones habitacionales seguras y transitorias que permitan a las mujeres salir efectivamente de situaciones de violencia, bajo la premisa de que no es posible romper ese ciclo sin garantizar antes un lugar seguro donde vivir.

L. Benedet contextualizó el origen del programa dentro del marco jurídico e institucional del país, que incluye la Ley Nacional de Igualdad de Género, las políticas públicas para una vida libre de violencia y los compromisos internacionales asumidos por Uruguay. En ese marco, Inmujeres es el órgano rector encargado de coordinar, evaluar y articular acciones orientadas a la igualdad de género y a la protección de mujeres en situación de violencia.

Al describir los objetivos del programa, explicó que busca articular instituciones públicas y privadas para ofrecer alternativas habitacionales que permitan a las mujeres sostener procesos de salida de la violencia. Estas alternativas incluyen garantías de alquiler con subsidio, apoyos para arriendo con opción de compra, obras menores de mejora habitacional y mecanismos de autoconstrucción en terrenos propios o de familiares, así como diversas modalidades de acceso transitorio a vivienda según las posibilidades de cada caso. En todos los escenarios, el acompañamiento psicosocial y jurídico de los servicios especializados se considera una condición clave para asegurar la autonomía y la continuidad del proceso.

Los criterios de ingreso al programa contemplan a mujeres mayores de 18 años, incluidas migrantes, que cuenten con algún ingreso estable que permita asumir los gastos básicos del hogar. Además, deben estar siendo atendidas por servicios especializados en violencia basada en género, los cuales sostienen el acompañamiento durante todo el proceso. La prioridad se otorga a quienes conviven con el agresor o llevan más de seis meses en atención especializada. Cuando la mujer es propietaria de una vivienda, se analiza su situación legal y la presencia del agresor para determinar la pertinencia de su ingreso al programa.

En cuanto al funcionamiento, L. Benedet explicó que los servicios especializados identifican a las mujeres que cumplen con los requisitos y presentan la postulación al Inmujeres. Una mesa técnica interinstitucional, conformada por profesionales del Instituto y del Ministerio de Vivienda, evalúa el caso y emite una resolución que habilita el acceso al programa. Todo el proceso se desarrolla con acompañamiento permanente de los servicios, que sostienen el vínculo con la mujer y su familia.

La presentación incluyó resultados y perfiles de las mujeres participantes. La mayoría son jóvenes, entre 18 y 39 años, con niveles educativos que no superan el ciclo básico y con ingresos bajos o inestables, generalmente provenientes de prestaciones sociales. El 87 % tiene hijos o hijas a su cargo, lo que evidencia la centralidad de las tareas de cuidado en sus trayectorias. L. Benedet señaló que, aun cuando existe oferta de formación laboral y oportunidades de inserción, las responsabilidades de cuidado restringen la continuidad de estos procesos. Tras el egreso del programa, muchas mujeres logran acceder a un alquiler, aunque enfrentar los pagos mensuales sigue siendo un desafío, por lo que las garantías ofrecidas por el Ministerio de Vivienda se convierten en un recurso fundamental. Un dato relevante fue el incremento del número de participantes propietarias de vivienda después del proceso, que pasó del 2 al 11,2 %, aunque enfatizó que aún es una cifra baja respecto al total.

L. Benedet destacó además que los impactos del programa trascienden a las participantes, ya que también influyen positivamente en sus hijos e hijas, en especial en la reflexión sobre sus derechos y en el fortalecimiento del entorno familiar. Como aprendizajes del proceso, remarcó la certeza de que garantizar una vivienda segura es una condición indispensable para salir de la violencia y que las alternativas habitacionales constituyen una pieza estratégica dentro de las políticas públicas de protección. También subrayó el valor del apoyo profesional y de la coordinación interinstitucional como elementos centrales para fortalecer la autonomía de las mujeres.

Finalmente, enumeró los desafíos que persisten, entre ellos, ampliar el programa hacia otros perfiles femeninos, como adultas mayores o con más autonomía económica, pero con necesidades habitacionales específicas; profundizar la articulación con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados para garantizar apoyos que permitan la continuidad educativa y laboral; fortalecer la oferta de formación y empleo, y ampliar los equipos profesionales encargados del acompañamiento. Concluyó su intervención reafirmando que el acceso a una vivienda digna y segura no solo permite salir de la violencia, sino también reconstruir proyectos de vida y abrir nuevas oportunidades para las mujeres y sus familias.

La presentación de Valeria España, a cargo de la Dirección de Protección Social para Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, se centró en los vínculos entre la movilidad humana, las políticas urbanas y los feminismos y en cómo estas dimensiones pueden articularse para garantizar el derecho a la ciudad y el acceso efectivo a la vivienda para las personas migrantes. Inició destacando que este espacio de diálogo resulta especialmente valioso en un contexto regional y global marcado por discursos de odio, xenofobia y retrocesos en materia de reivindicaciones, lo que vuelve urgente repensar la gobernanza migratoria desde enfoques de derechos y de justicia social.

Explicó que Uruguay tiene una larga historia migratoria, central en su construcción nacional. Aunque suele predominar un relato fundacional que se apoya en la idea de que "todos venían de los barcos", este imaginario invisibiliza procesos de migración forzada, incluido el legado de la esclavitud, y desconoce la diversidad étnica del país, donde la población afrodescendiente representa un 10 %. La ponente subrayó la importancia de recuperar esta "memoria migrante" y entender que los procesos de movilidad humana han contribuido históricamente al crecimiento demográfico y económico, a la vez que han ido transformando la composición social del país. Recordó que Uruguay vivió durante décadas un saldo migratorio negativo, agravado durante la dictadura y luego en las crisis económicas de los años 2000. Ese patrón cambió en 2009, cuando comenzaron a llegar nuevas corrientes de migrantes de origen latinoamericano y caribeño, en especial procedentes de Venezuela, Argentina, Cuba, Brasil y Colombia, lo que complejizó las dinámicas identitarias y territoriales.

V. España resaltó que Uruguay mantiene, como política de Estado, el reconocimiento del derecho a migrar, lo que implica no solo disponer de una normativa de avanzada, sino también garantizar que las políticas sociales no reproduzcan barreras vinculadas a requisitos de ciudadanía o documentación. A menudo, señaló, el país cuenta con normativas progresistas que, sin embargo, encuentran obstáculos cuando una persona migrante intenta ejercer derechos concretos, ya sea en salud, educación o vivienda.

Al referirse a los datos más recientes, valoró que el último censo confirmó que el modesto crecimiento poblacional del país se debió íntegramente a la llegada de migrantes. Sin embargo, esta presencia creciente se enfrenta a desafíos administrativos y sociales. En particular, advirtió que el establecimiento de requisitos de visa para ciertos orígenes nacionales ha generado procesos de racialización en los mecanismos de acceso al territorio, lo que incrementa la vulnerabilidad de quienes intentan llegar. Más allá de sus propósitos declarados, estas restricciones terminan fortaleciendo redes criminales dedicadas al tráfico y la trata, que lucran de las barreras a la movilidad.

La gobernanza migratoria en Uruguay se estructura a través del Consejo Nacional de Migración, un espacio interinstitucional donde participan diferentes ministerios, incluida la Cancillería, el Ministerio de Trabajo, los de Salud, Vivienda y Educación, así como un consejo consultivo integrado por organizaciones de la sociedad civil. Desde allí se formula la política migratoria y se identifican obstáculos institucionales y administrativos que pueden derivar en prácticas discriminatorias. La dirección que encabeza Valeria trabaja de forma articulada con otras dependencias estatales para asegurar que las personas migrantes accedan a su documentación de forma rápida, entendiendo que la cédula de identidad es una puerta de entrada a otros derechos sociales, especialmente la salud, la educación y la vivienda.

La ponente señaló que las personas migrantes recientes suelen encontrarse en condiciones de mayor vulnerabilidad, en particular por la ausencia de redes familiares y comunitarias. En el ámbito laboral, explicó que la población migrante está ampliamente sobrecalificada para los trabajos en los que logra insertarse, estando sobrerrepresentada en sectores de servicios caracterizados por baja remuneración y alta precariedad. Mencionó el caso paradigmático de las empresas de reparto por aplicación, donde se registran situaciones de explotación, informalidad y riesgos extendidos a nivel regional.

En el segundo tramo de su presentación, V. España desarrolló la relación entre migración y vivienda. Retomó la pregunta sobre "cómo renacer en otro país" y cómo reconstruir el hogar como espacio afectivo y simbólico, más allá de su dimensión material. Subrayó que uno de los grandes desafíos del Estado es garantizar que las y los migrantes puedan recuperar ese sentido de hogar mediante políticas públicas específicas. En Montevideo, las crisis habitacionales recientes, sumadas a procesos de gentrificación, hicieron visibles desalojos que afectaron sobre todo a mujeres migrantes, muchas de ellas trabajadoras domésticas. Estas situaciones, señaló, no deben ser concebidas como conflictos entre privados, sino como problemas estructurales que requieren respuestas estatales integrales para evitar que la precariedad habitacional se profundice.

A partir de estas problemáticas, se impulsó el diseño de un programa —actualmente en fase de ampliación con apoyo del BID— que busca articular soluciones habitacionales transitorias, subsidios de alquiler y mecanismos de acompañamiento para personas migrantes en situación de vulnerabilidad. Este trabajo se complementa con el Centro de Referencia para Migrantes, concebido como una ventanilla única que facilita la regularización documental, la afiliación al sistema de salud, la inserción educativa y la postulación a programas de vivienda.

V. España señaló que algunas políticas de vivienda existentes, como el alquiler con opción a compra, exigían hasta hace poco tener ciudadanía legal, algo completamente inaccesible para las personas migrantes, ya que esta se obtiene recién entre 10 y 15 años después de la llegada. Este tipo de requisitos, asociados a creencias erróneas sobre la migración, impedían el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda. Por ello subrayó la importancia de eliminar estos obstáculos y diversificar las respuestas estatales, incorporando inspecciones técnicas previas al otorgamiento de garantías de alquiler, para evitar que las personas migrantes accedan a viviendas en condiciones inaceptables.

Explicó también que su Dirección de Protección Social integra áreas vinculadas a situaciones de calle, salud mental y programas para personas liberadas, lo que evidencia la necesidad de diseñar políticas diferenciadas según perfiles y trayectorias. No es lo mismo responder a una familia migrante que ha atravesado el continente para llegar al país que a una persona con un largo historial de consumo problemático. De esta reflexión deriva la importancia de construir respuestas situadas, que contemplen la diversidad de experiencias y necesidades.

Entre los modelos alternativos que se están explorando, destacó el potencial de las cooperativas de vivienda, una tradición fuerte en Uruguay, que permite formas de propiedad colectiva y proyectos comunitarios sostenidos en el tiempo.

Añadió que las soluciones transitorias deben priorizar a mujeres con niños y niñas, asegurando que las políticas de vivienda se articulen con apoyos laborales, educativos y de cuidados.

V. España concluyó subrayando que la vivienda constituye siempre un "piso mínimo" desde el cual es posible reconstruir la vida y acceder a otros derechos. Garantizar ese punto de apoyo es indispensable para que las personas migrantes puedan integrarse en condiciones de igualdad y desarrollar proyectos vitales sostenibles. Cerró su intervención reafirmando la necesidad de sistemas de protección social robustos, políticas habitacionales flexibles y una gobernanza migratoria que coloque a las personas en el centro.

La presentación de Catalina Colorado, subdirectora de población en el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), abrió con una invitación poco habitual en los espacios técnicos: pidió al público cerrar los ojos y detenerse un instante en la gratitud por el lugar que cada quien habita, por sus entornos y sus historias de llegada. Explicó que ese gesto busca recordarnos que la vivienda, y más aún la vivienda digna, nunca es un hecho dado, sino una condición desigual que sostiene o limita la vida cotidiana, en especial para las mujeres y poblaciones vulnerables.

Desde allí situó el trabajo del Instituto, entidad descentralizada cuyo propósito es reducir el déficit habitacional en una ciudad donde predominan las carencias cualitativas por sobre las cuantitativas. C. Colorado explicó que en Medellín existen tres grandes formas de habitar: la propiedad formal —con títulos—, la posesión —sin títulos, pero con reconocimiento social del dominio— y el arriendo. Esta diversidad revela que no todas las familias tienen las mismas rutas para acceder a una vivienda segura y que las estrategias públicas deben adaptarse a esa heterogeneidad.

Respecto a la propiedad, señaló que el distrito impulsa proyectos de vivienda de interés social y prioritario, aunque enfrenta el desafío estructural de la escasez de suelo urbanizable. Ante ello, han comenzado a priorizar procesos de redensificación en barrios consolidados mediante el aprovechamiento de predios públicos y desarrollos de pequeña escala que permiten preservar redes comunitarias. En esta misma línea, destacan los subsidios distritales para la compra de vivienda, donde entre el 60 % y 70 % de las personas beneficiarias son mujeres cabezas de hogar. Una innovación reciente es la creación de subsidios para la cuota inicial, entendidos como una herramienta fundamental para que las familias puedan simultáneamente cubrir arriendos y mantener su economía doméstica durante el proceso de adquisición. Esta convocatoria, lanzada en septiembre 2025, beneficiará a 1200 hogares.

Para las familias propietarias, Isvimed opera también subsidios de mejoramiento de vivienda. C. Colorado subrayó la importancia de esta línea, pues en muchos casos una intervención tan básica como instalar una puerta transforma por completo la seguridad y habitabilidad del hogar, en especial en viviendas habitadas mayoritariamente por mujeres, niñas y niños. Además, el programa se está ampliando hacia un modelo de articulación interinstitucional que permita acompañar a las familias más allá de la mejora física: detección de violencias, acceso a salud, servicios sociales y fortalecimiento de redes de cuidado.

En materia de arriendo, Medellín cuenta con subsidios temporales para hogares evacuados por riesgo, donde nuevamente el mayor porcentaje corresponde a mujeres jefas de hogar. También destacó el reciente trabajo articulado con el Ministerio de Vivienda para canalizar subsidios destinados a población migrante, de los cuales ya se han otorgado 50, un número pequeño pero resultado de un esfuerzo complejo de verificación y acompañamiento.

En este contexto, el fenómeno que define hoy uno de los retos más urgentes de la política habitacional de Medellín es la de los inquilinatos. Según los datos expuestos, el 70 % de las personas que habita estos espacios es población migrante; cada dormitorio suele alojar entre 3 y 4 personas, con ingresos que rondan los 210 dólares mensuales y pagos diarios de 2 a 3 dólares por el uso del cuarto y servicios básicos. Isvimed ha identificado 1332 inquilinatos, concentrados sobre todo en el centro de la ciudad, donde la cercanía al trabajo reduce costos de transporte para una población altamente precarizada.



Fuente: Presentación Catalina Colorado (2025).

Los inquilinatos, aunque constituyen una alternativa de acceso inmediato a un techo, presentan condiciones muy deficitarias: baños sin puertas, cuartos sin ventilación o ventanas, pisos de tierra y paredes deterioradas. A ello se suma la dificultad de intervenir por tratarse de espacios privados, ya que su operación genere dinámicas económicas significativas para quienes los administran.

Medellín ha dado un paso relevante al reconocer formalmente los inquilinatos como una tipología residencial en su Plan de Ordenamiento Territorial. Además, el Plan Estratégico Habitacional los considera espacios transitorios que deben cumplir condiciones de salubridad y funcionar como puentes hacia una vivienda individual; en ese sentido, se han realizado intervenciones de tipo social, articulando la oferta de diferentes dependencias del distrito.

El reto ahora, explicó C.Colorado, es avanzar hacia su reclasificación como equipamientos sociales, lo que permitiría inversión pública en infraestructura, siempre condicionada a acuerdos con propietarios. Esta estrategia busca regularizar, dignificar y formalizar este tipo de habitación, garantizando condiciones mínimas y fortaleciendo la presencia institucional en salud, educación, bienestar social y regularización migratoria.

C. Colorado concluyó enfatizando que el reconocimiento de los inquilinatos como espacios legítimos de habitar, aunque transitorios, implica un giro fundamental en la política urbana: pasar de tolerar un fenómeno precario a gestionarlo, regularlo y transformarlo. Y, sobre todo, asumir que la vivienda en todas sus formas es un pilar para la dignidad y seguridad de las mujeres, de la población migrante y de las familias que sostienen la vida cotidiana en condiciones de alta vulnerabilidad.



Fuente: Presentación Catalina Colorado (2025).

La intervención de Daniela Núñez Ruiz, coordinadora de Gestión del Conocimiento de ONU-Hábitat para México, Cuba y Centroamérica, ofreció un marco amplio y articulado sobre la relación entre género, ciudad y vivienda adecuada, situando estos temas en la agenda global y en los desafíos concretos de los territorios latinoamericanos. Inició contextualizando el rol de ONU-Hábitat como programa de la Asamblea General de Naciones Unidas encargado de promover políticas urbanas que respondan a problemáticas contemporáneas como el crecimiento urbano acelerado, el cambio climático, la migración y el derecho a la vivienda. Desde esta perspectiva, recordó que la forma en que están diseñadas las ciudades nunca es neutral: reproducen jerarquías históricas entre lo público y lo privado que han invisibilizado los cuidados y excluido a las mujeres de la toma de decisiones urbanas. Presentó datos reveladores sobre las brechas globales —inseguridad en el espacio público, baja titularidad de la tierra, desigual distribución del trabajo de cuidados, violencia doméstica— y luego situó estas cifras en los contextos latinoamericanos, donde la violencia sexual en el espacio público y los patrones de movilidad configuran realidades especialmente críticas.

Desde allí enfatizó por qué es imprescindible incorporar la perspectiva de género en la planificación urbana: para 2050, la mayoría de la población mundial vivirá en ciudades y las mujeres jóvenes en condiciones precarias serán quienes enfrenten con mayor intensidad las desigualdades urbanas. Señaló que la ciudad puede ser tanto parte del problema como de la solución, siempre que los procesos de planificación coloquen en el centro las necesidades y experiencias de mujeres y niñas. En este marco, presentó la metodología Her City, una herramienta abierta que orienta pasos concretos para incorporar el enfoque de género mediante procesos participativos y sensibles a las desigualdades interseccionales, recientemente relanzada y próxima a publicarse en español.

Su exposición avanzó luego hacia la vivienda adecuada como un componente estructural de la igualdad. Recordó que, aunque el déficit cuantitativo es enorme, el déficit cualitativo es aún mayor y afecta de manera desproporcionada a las mujeres. La sobrecarga de cuidados, la feminización de los hogares monoparentales y la baja propiedad femenina en la región configuran un panorama en el que la vivienda se convierte tanto en un recurso escaso como en una condición habilitante para otros derechos laborales, educativos y sociales. Desde el enfoque de ONU-Hábitat, la vivienda adecuada comprende siete dimensiones —seguridad de tenencia, servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural— que deben orientar tanto las políticas públicas como la evaluación de proyectos urbanos. Subrayó que la vivienda, bien ubicada bajo criterios de proximidad, es una herramienta fundamental para reorganizar territorialmente los servicios de cuidado y acercar servicios esenciales, de manera a aliviar y redistribuir estas cargas que recaen usualmente en las mujeres.

En la parte final, D. Núñez presentó experiencias inspiradoras como Mi Comunidad, Mi Casa en El Salvador y los Barrios de Cuidados en Ciudad Juárez, ejemplos que vinculan mejoramiento habitacional, intervenciones en espacio público y sistemas territoriales de cuidados diseñados desde la escala barrial. En el diálogo con el público, reconoció que aún no existe un sistema consolidado de monitoreo que permita evaluar de forma estandarizada la relación entre vivienda, tejido urbano y calidad socioespacial, pero señaló que ONU-Hábitat trabaja en traducir los principios de vivienda adecuada en indicadores medibles que orienten tanto el diseño urbano como la evaluación de políticas. Cerró advirtiendo que la respuesta habitacional puramente cuantitativa ha generado errores históricos en diversos países —conjuntos periféricos desconectados, cargas excesivas sobre la movilidad, abandono residencial— y que el reto actual es reconfigurar la ciudad desde un compromiso de sostenibilidad, con diseños sensibles a nuevas formas familiares y sociales y con procesos participativos que reconozcan a las mujeres como expertas cotidianas de sus territorios.



Panel 5

Política pública local de acceso a albergues y vivienda social en arriendo, incluyendo la lucha contra las violencias de género en Francia



DANIEL CASTRO TORRES

Experto en gestión de políticas públicas de alojamiento, acceso a la vivienda y «La vivienda primero» en Francia



FLORA AUTEFAGE

Subdirectora de Prevención y Acción Social, Departamento de Seine-Saint-Denis, Francia



MAÍRA TOPALL

Responsable de relaciones internacionales del Observatorio de las violencias basadas en género,Departamento de Seine-Saint-Denis, Francia

Daniel Castro Torres, abogado francocolombiano, experto en políticas públicas de alojamiento y acceso a vivienda en Francia, quien trabaja actualmente en la Delegación Interministerial para el Alojamiento y Acceso a la Vivienda (Dihal) del mismo país, ofreció una mirada precisa y crítica sobre el funcionamiento del sistema francés de protección social y vivienda. Desde una posición técnica y también personal, relató su trayectoria profesional dentro del sector AHI —servicios sociales de acogida, albergue e inserción, por sus siglas en francés—, iniciada como "escuchante social" en la línea 115 de atención a personas sin hogar en el Samusocial de París. Esa experiencia —que consiste en orientar a personas recién llegadas al territorio, en situación de calle o con cualquier otra urgencia social, para conectarlas con los programas de acompañamiento y albergue de urgencia y para poder activar las rutas de acceso a la vivienda en arriendo— le permitió contextualizar la dimensión humana del sistema y las razones por las cuales la política pública francesa parte del principio de incondicionalidad: según la ley, cualquier persona que necesite alojamiento de emergencia debe recibirlo, sin importar su nacionalidad, estatus migratorio ni circunstancias personales.

D. Castro situó el panorama general de Francia: un país de 68 millones de habitantes, estructurado en regiones, departamentos y municipios. En términos de organización administrativa, explicó que el país combina a nivel local dos tipos de políticas públicas, el poder estatal desconcentrado a través de prefecturas y delegaciones regionales— y y el poder local descentralizado correspondiente a gobiernos locales. Su propia labor se inscribe en la desconcentración: coordina la aplicación local de la política nacional de alojamiento y vivienda, así como la gestión del presupuesto estatal destinado a personas en situación de precariedad y su acceso a una vivienda digna.

A partir de este marco, presentó una radiografía del fenómeno de las personas sin hogar en Francia, estimadas actualmente en más de 350 000 personas, una cifra que incluye tanto quienes duermen en la calle como quienes están en albergues temporales u hoteles sociales. Explicó los múltiples factores que llevan a esta situación, entre estos, las dificultades económicas por el alto costo de la vivienda, las rupturas familiares, los problemas de salud mental y también la finalización de los programas de protección estatal para jóvenes que cumplen la mayoría de edad y quienes se encontraban bajo la tutela del Estado. Frente a este escenario, Francia moviliza una amplia red de protección social que incluye subsidios al arriendo, ayudas para el acceso a vivienda, acompañamiento social y lugares de albergue financiados por el Estado. La DIHAL administra la llamada línea presupuestaria nacional BOP 177, destinada al alojamiento de emergencia, acceso a vivienda y acompañamiento a personas en vulnerabilidad. Con estos recursos se financian cerca de 200 000 plazas de albergue cada noche, entre centros de acogida, alojamientos de urgencia y noches de hotel para familias.

Castro explicó que desde 2017 se impulsa una estrategia nacional de transformación del sistema de alojamiento para garantizar que las personas no solo accedan a un lugar donde dormir, sino que puedan vivir allí en condiciones dignas y sostener su permanencia en el tiempo. Esta estrategia se despliega en 44 territorios piloto, donde se busca demostrar que la coordinación entre el Estado, las colectividades locales, el sector privado y la sociedad civil puede generar respuestas integrales. La política se basa en el principio de que la vivienda no es algo que alguien se "merece" ni se condiciona al buen comportamiento o al cese de consumo para quienes sufren una adicción, sino que constituye un derecho humano cuyo acceso no debe depender de requisitos graduales y debe ser abordado de una manera multidisciplinaria, reduciendo los riesgos y poniendo a la persona en el centro de la política pública. Por ello se promueve el paso directo a vivienda social de arriendo o a soluciones de arrendamiento acompañado, evitando la lógica escalonada de "probar" a la persona en albergues antes de permitirle acceder a una vivienda.

Un elemento central de la exposición fue la explicación del Servicio Integral de Acogida y Orientación (SIAO, por sus siglas en francés), el dispositivo social que articula todas las solicitudes de alojamiento y vivienda en cada territorio. Antes de su creación, cada institución o estructura de acompañamiento manejaba su propia lista de albergues, de manera independiente de toda regulación central, lo que generaba inequidades según la puerta de entrada a los programas de ayuda para las personas más vulnerables.

Con el SIAO, todas las solicitudes se concentran en un único sistema que asigna plazas de albergue o apartamentos de arriendo de manera equitativa, maneja la línea de urgencias sociales 115, produce datos estadísticos y garantiza seguimiento. Gracias al programa y los principios de "le logement d'abord" o "la vivienda primero", se permitió desde 2018 asignar más de 710 viviendas directas a personas en situación de calle dentro de los territorios piloto y cerca de 195 000 viviendas sociales a través del sistema nacional de asignación.

Otro aspecto que D. Castro destacó fue la política francesa de acogida para mujeres víctimas de violencia, considerada una prioridad de Estado. El país ha incrementado significativamente el número de plazas dedicadas a este público, pasando de 5 000 a más de 11 000 plazas en refugios temporales entre 2017 y 2023. Estos espacios buscan ofrecer condiciones de protección a la mujer víctima de violencias, anonimato, acompañamiento social, apoyo jurídico y la articulación con la policía y los sistemas de justicia para facilitar la denuncia, así como la protección de hijas e hijos. Castro insistió en que esta política no opera como un subsistema aislado, sino como parte del sistema generalista de alojamiento y vivienda, lo cual refuerza el principio de igualdad en el acceso.

Algunas cifras clave de la política «vivienda primero» o LDA (2018-2025)

- **710.000 personas** han accedido a una vivienda gracias al plan Logement d'abord entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2025.
- Se han atribuido **195.000 viviendas** sociales a un público sin hogar, de las cuales 122.340 entre 2017 y 2022 y 72.660 entre 2023 y 2025.
- Cerca de **90.000** plazas de servicios de intermediación de alquiler (IML) han sido financiadas por el Estado.
- **12.200** viviendas denominadas 'residencias sociales' entre 2023 y 2024.
- Se han abierto **25.500** plazas en 'pensión familiar', de las cuales 10.400 desde el inicio del plan LDA.

*Bilan à mi-parcours du deuxième plan quinquennal pour le Logement d'abord, DIHAL. Disponible en : https://www.info.gouv.fr/upload/media/content/0001/15/dabee9efd746784770538adca2dd693a1f9caa68.pdf

Fuente: Presentación Daniel Castro (2025).

Finalmente, abordó el tema de las personas refugiadas, señalando que existe una narrativa distorsionada que sostiene que este grupo recibe privilegios inmediatos. Aclaró que las personas solicitantes de asilo transitan por un sistema específico de acogida, financiado con un presupuesto distinto al de la DIHAL; solo cuando obtienen el estatus de refugiadas ingresan al sistema general de protección social y vivienda, en igualdad con cualquier otra persona en situación de precariedad. Recalcó que la política francesa de vivienda y alojamiento no opera en función de categorías identitarias —migrantes, mujeres, nacionales— sino de la necesidad objetiva de protección, de acuerdo con la ley y los principios fundamentales del Estado.

La exposición concluyó destacando que el desafío principal no es solo financiar plazas o producir vivienda, sino asegurar una coordinación territorial efectiva, capaz de comprender la heterogeneidad de situaciones, acompañar a las personas en sus trayectorias y garantizar que ninguna desavenencia de la vida —económica, social o migratoria— desemboque en la calle.

El caso francés muestra, con sus avances y tensiones, que la política pública de vivienda no puede depender de lógicas de caridad ni de escalas de merecimiento, sino de un enfoque de derechos con soporte institucional sólido, capacidad de articulación y marcos legales que obliguen al Estado a responder.

La intervención de Flora Autefage, subdirectora de Prevención y Acción Social, ofreció una mirada sobre el rol del Departamento de Seine-Saint-Denis dentro de la compleja arquitectura institucional francesa —marcada por la coexistencia de competencias estatales, regionales y departamentales— y su actuación directa en materia social, habitacional y de protección a poblaciones vulnerables, especialmente mujeres migrantes. Explicó que, pese a la multiplicidad de mandatos administrativos, el Departamento destina cerca de 4 millones de euros anuales a programas de ayuda alimentaria, apoyo a trámites digitales, acompañamiento para el acceso a derechos, orientación laboral y dispositivos de protección infantil.

La prioridad es asegurar que las personas en situación de vulnerabilidad, en particular las mujeres, cuenten con apoyos que les permitan reconstruir proyectos de vida, acceder a servicios esenciales y evitar caer en mayores niveles de precariedad.

En la dimensión habitacional, F. Autefage subrayó las limitaciones del departamento, dado que la política de vivienda es sobre todo competencia del Estado central, aunque el Sena-Saint-Denis enfrenta una realidad especialmente crítica: saturación extrema de los dispositivos de alojamiento y tiempos de espera que pueden llegar a 10 o 15 años para acceder a vivienda social. Ante esta situación, la entidad implementa medidas de prevención del sinhogarismo, como ayudas financieras para evitar desahucios y acompañamiento social intensivo para familias que acumulan deudas o atraviesan situaciones de inestabilidad. También gestionan centros de hospedaje de carácter temporal —muchos aún basados en aposentos sin condiciones adecuadas de autonomía familiar— y programas específicos para mujeres embarazadas, aisladas o en situación de alta vulnerabilidad.

Uno de los ejes más innovadores de su presentación fue la descripción de las estrategias para enfrentar la precariedad energética y la insuficiencia del parque habitacional. Destacó que muchos de los inmuebles utilizados son construcciones antiguas, concebidas para alojar a trabajadores migrantes del norte de África en la posguerra, hoy deteriorados y sometidos a temperaturas extremas agravadas por el cambio climático. Como respuesta, el ente ha impulsado un programa de alojamientos móviles y modulares, financiado junto con empresas públicas como la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF, por sus siglas en francés), que permite crear espacios dignos y rápidos de instalar —pequeñas unidades transportables y adaptables— destinadas principalmente a mujeres y niños que requieren un hospedaje temporal de hasta seis meses. Estos módulos ofrecen una solución inmediata mientras se reorganizan procesos de reubicación más estables y permiten flexibilidad territorial, ya que pueden instalarse en terrenos disponibles y trasladarse cuando sea necesario.



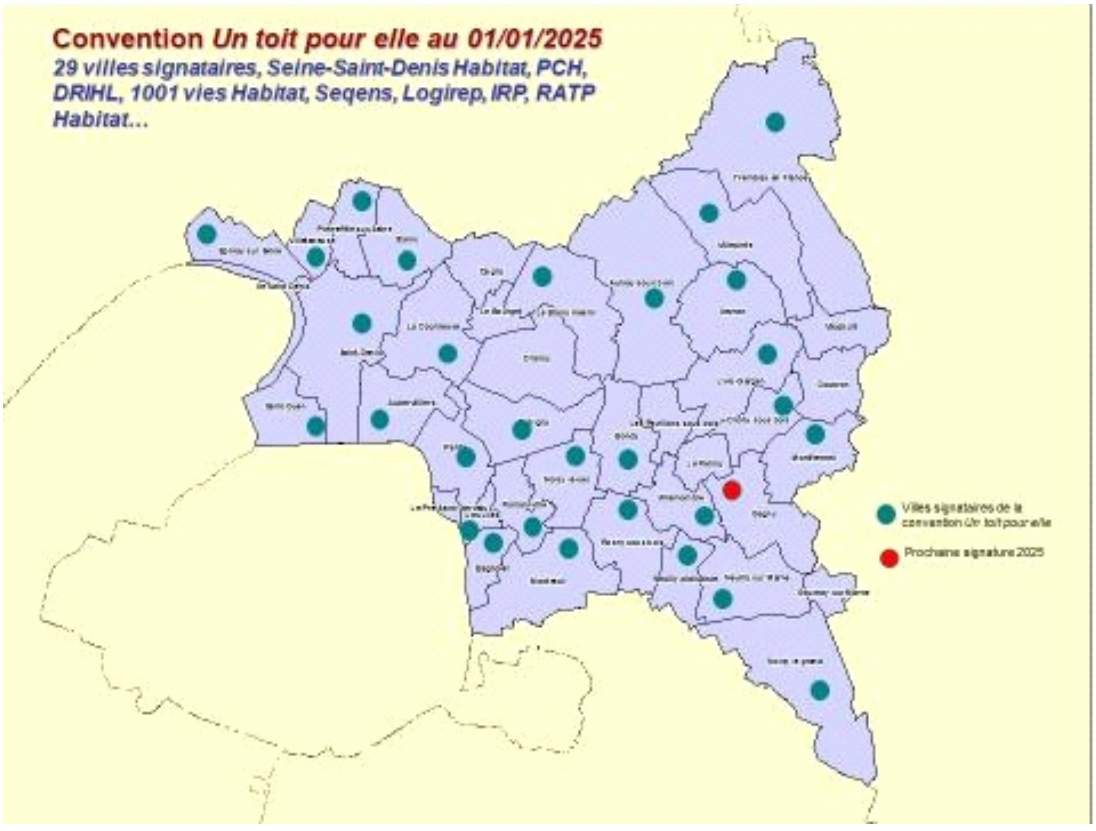
Fuente: Presentación Flora Autefage (2025).

Por último, Autefage resaltó que el departamento complementa estas acciones con iniciativas de sensibilización, capacitación y producción de conocimiento, incluyendo la creación de un observatorio de violencia contra las mujeres, que permite orientar políticas específicas y articular mejor los esfuerzos entre los múltiples actores territoriales. Su intervención dejó claro que, en un contexto de saturación habitacional y fuerte presión migratoria, el departamento de Seine-Saint-Denis trabaja para mantener el principio francés de dignidad y protección universal, apostando por soluciones creativas, móviles y profundamente orientadas al apoyo social.

La presentación de Maíra Topall, responsable del Observatorio de Violencias de Género del Departamento de Seine-Saint-Denis, ofreció una mirada sobre el funcionamiento, las misiones y los aprendizajes de esta institución pionera en Francia. Explicó que el observatorio, creado en 2002 como una decisión política voluntaria del departamento, fue el primero de su tipo en el país y ha servido desde entonces como laboratorio para el desarrollo de políticas y dispositivos que luego se han extendido a escala nacional. Su labor se articula con una amplia red de actores —servicios estatales, justicia, policía, profesionales sociales y asociaciones especializadas— que permite abordar la violencia de género desde un enfoque integral.

M. Topall describió las cuatro grandes misiones del observatorio: producir conocimiento y visibilizar la violencia contra las mujeres mediante estudios, análisis territoriales y recopilación de datos; formar a profesionales —en especial policías, equipos sociales y funcionarios municipales— para que comprendan los ciclos de violencia y operaren las rutas de atención de manera coordinada en sintonía; sensibilizar a jóvenes y habitantes a través de jornadas abiertas, herramientas pedagógicas y campañas, y, finalmente, desarrollar proyectos innovadores de salida de la violencia. Señaló que el departamento de Seine-Saint-Denis ha sido un territorio de experimentación donde dispositivos clave, como el programa de acompañamiento a niñas y niños huérfanos por feminicidio, se diseñaron y validaron antes de ser adoptados por el Estado francés.

Una parte central de su intervención estuvo dedicada al desafío del acceso a la vivienda para mujeres víctimas de violencia. A partir de los datos recogidos entre 2012 y 2023, el observatorio evidenció que muchas de ellas, incluso después de salir de la situación de peligro inmediato, enfrentan enormes dificultades para acceder a una vivienda social estable en arriendo. Esta barrera se agudiza cuando el agresor permanece en la misma ciudad, cuando las víctimas necesitan trasladarse a otro municipio por razones de seguridad o cuando los arrendadores, aun del sector público, se muestran reticentes a alquilar a personas con trayectorias marcadas por la violencia de género. Ante ello, el observatorio desarrolló un dispositivo intermunicipal que articula a 30 ciudades y a múltiples institutos de vivienda social públicos, para garantizar una oferta de vivienda segura y acompañada por servicios sociales. Este programa no solo facilita la movilidad territorial de las mujeres, sino que también forma a arrendadores y funcionarios para romper estigmas y asegurar que comprendan que las solicitantes están siendo acompañadas por equipos especializados y cuentan con condiciones para sostener un alquiler.



Fuente: Presentación Maira Topall (2025).

M. Topall insistió en que el acceso a la vivienda no es uniforme: algunas mujeres pueden regresar a su hogar tras la expulsión del agresor, otras pueden permitirse alquilar en el mercado privado y otras requieren un apoyo más intensivo. El dispositivo, por tanto, se orienta a quienes enfrentan mayores barreras económicas, administrativas o psicológicas. Explicó además que mujeres víctimas de violencia sexual, incluidas aquellas que activan dispositivos de protección urgentes, también pueden acceder a esta red de alojamiento, siempre asistidas por equipos multidisciplinarios. En total, el programa ha protegido a más de 1100 personas —entre ellas 387 mujeres y 138 niños solo en 2024—, posibilitando procesos reales de reconstrucción personal y salida del ciclo de violencia.

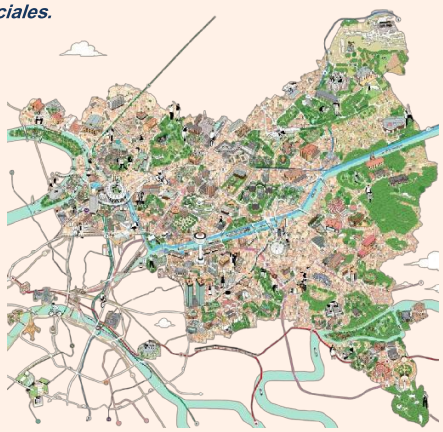
Otro aspecto relevante fue la referencia a los desafíos para las mujeres migrantes, en especial aquellas sin estatus regular. M. Topall subrayó que, gracias al acompañamiento integral de asociaciones afiliadas, es posible tramitar procesos de regularización que permitan después acceder a vivienda benéfica y a otros derechos, mostrando la importancia de un abordaje jurídico y social combinado.

En la parte final, destacó la dimensión internacional del observatorio. Con más de veinte años de experiencia acumulada, la institución ha impulsado desde 2021 un programa de intercambio de buenas prácticas con territorios de otros países, como Costa Rica y Túnez. Estos espacios comparativos revelan que la problemática del acceso a vivienda para mujeres víctimas de violencia es transversal, incluso en geografías insulares donde la movilidad entre islas es una estrategia de protección. El observatorio busca así transferir aprendizajes, adaptar soluciones y fortalecer capacidades locales para enfrentar un desafío global.

La intervención de M. Topall permitió comprender cómo un territorio con fuertes tensiones sociales ha logrado construir políticas públicas innovadoras y articuladas, donde la vivienda, el apoyo especializado y la cooperación interinstitucional son pilares para garantizar la seguridad y autonomía de las mujeres.

Le territoire de la Seine-Saint-Denis en quelques chiffres

Le département de la Seine-Saint-Denis est un territoire dense et dynamique de 40 communes, présentant de nombreuses fragilités économiques et sociales.



Plus d'un 1,65 millions d'habitant.e.s (+ 9 000 chaque année)

Près 30% de la population est primo-arrivante (taux le plus élevé de France)

Un taux de pauvreté qui s'élève à 28% contre 14,3% en France métropolitaine

Un taux de chômage élevé de 17,9% (4,5 points plus important que la moyenne nationale)

Près de 90 000 allocataires du RSA

La Seine-Saint-Denis est le 3e département le plus dynamique en création d'entreprises après Paris et les Bouches-du-Rhône.

66% de ces entreprises sont des micro-entreprises.

Près de 40% de la population a moins de 25 ans

La SSD est le 2ème pôle universitaire d'Île de France avec près de 60 000 étudiants

D'ici 2030, la SSD connaîtra une forte augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes (+30% contre +20% en IdF)

Fuente: Presentación Maira Topall (2025).

Panel 6

Mujeres en la construcción y autoconstrucción de sus viviendas en Bolivia y Colombia



PASTORA ZUÑAGUA MAMANI

Asistente técnica programa mujeres constructoras, Red Hábitat, Bolivia, y Red Latinoamericana Mujer y Habitat



BEATRIZ COBO

Subdirectora Centro de la Construcción del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Valle

Pastora Zuñagua, representante del Programa Mujeres Constructoras de Red Hábitat Bolivia, ONG miembro de la Red Latinoamericana Mujer y Hábitat, explicó que la primera coalición lleva 30 años trabajando en la defensa de los derechos a la ciudad, la vivienda y el hábitat, con un enfoque de género, interculturalidad y sostenibilidad ambiental, articulando su labor con organizaciones sociales, gobiernos locales, academia, sector privado y organismos internacionales. Señaló que el programa surge el 2010 a partir de un diagnóstico sobre las condiciones sociolaborales de las mujeres en la construcción, que reveló una realidad caracterizada por precariedad, violencia, informalidad, acoso laboral, discriminación y una brecha salarial que, según la OIT, supera el 38 % respecto a los hombres por el mismo trabajo, además de la ausencia de procesos formativos que reconocieran sus competencias como trabajadoras calificadas. A partir de estos hallazgos, se implementaron los primeros cursos de capacitación técnica, iniciando un proceso sostenido que ha transformado las condiciones laborales, la autoestima y el reconocimiento social de las constructoras.

Destacó que el programa evolucionó hacia un modelo integral que articula formación técnica, empoderamiento, autonomía económica e incidencia en políticas públicas, estableciendo una ruta formativa que combina habilidades en construcción, cursos de especialización, capacitación en derechos, liderazgo, vocería y fortalecimiento organizacional. En este proceso se lograron hitos clave, como la creación de la Asociación de Mujeres Constructoras (Asomuc, La Paz, 2015) y de la Asociación Nacional de Mujeres Constructoras de Bolivia (Asomucbol, 2019), consolidando la participación de estas obreras en la exigibilidad y defensa de sus derechos laborales y posicionándolas como actoras reconocidas en el sector. Asimismo, presentó los avances en incidencia política, destacando el Proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades y Remuneración Igualitaria entre Hombres y Mujeres Trabajadoras en Construcción, el Proyecto de Ley Municipal para la Formación Integral de Mujeres Constructoras y la Propuesta de Norma Técnica sobre Servicios Higiénicos Diferenciados por Sexo en Obras. Los instrumentos fueron desarrollados por las constructoras en colaboración con aliados y presentados ante diversas instancias del Estado, buscando transformar las condiciones estructurales que históricamente han mantenido a las mujeres en posiciones subordinadas dentro del sector, garantizando condiciones laborales más dignas, seguras y equitativas.

El modelo fue replicado con éxito en Santa Cruz (2020) y Cochabamba (2021), lo que permitió ampliar el alcance territorial del programa y fortalecer la formación técnica, la organización gremial y la generación de oportunidades laborales mediante alianzas con empresas privadas y cámaras de la construcción. Entre los resultados tenemos: 649 mujeres capacitadas, 63 procesos de formación certificados, 160 intervenciones urbanas en espacios públicos, unidades educativas y centros vecinales, más de 40 aulas abiertas y reconocimientos internacionales:

"De muestra basta un botón" de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude), 1.° Premio por la experiencia Mujeres Constructoras del Hábitat, Emprendimientos y Derechos en la Ciudad" y el premio "Buenas prácticas e innovaciones para la inclusión de mujeres jóvenes al mundo laboral" de la Unión Europea-EUROsociAL y la Fundación EU-LAC, que avalan la capacidad innovadora y el impacto social del programa.
Uno de los avances innovadores recientes fue la creación de la aplicación Mujeres Constructoras (2023), una herramienta digital diseñada para romper las barreras de acceso al empleo y conectar la demanda de mano de obra sectorial con las mujeres capacitadas. Esta app visibiliza las competencias, facilita contrataciones, amplía oportunidades de empleo y fortalece la autonomía económica de estas trabajadoras. Resaltó la importancia de las alianzas con universidades, colegios profesionales, empresas proveedoras de materiales de construcción y las cámaras departamentales del gremio.
Señaló que las alianzas han sido fundamentales para mejorar la calidad de la formación técnica y consolidar una red de apoyo interinstitucional para la sostenibilidad del programa.

Finalizó su intervención destacando que este proceso no solo ha transformado la vida de las participantes, sino que también ha impulsado cambios culturales en sus familias, barrios y espacios laborales. Ser mujer constructora ya no es un motivo de estigma, sino un símbolo de orgullo, emancipación económica y ejercicio pleno de derechos.

Enfatizó que la transformación social es posible cuando la formación técnica, el empoderamiento político, los derechos y la autonomía económica avanzan de manera articulada. Con ese espíritu, invitó a continuar fortaleciendo y ampliando las redes de colaboración regionales para que las mujeres puedan ocupar, con dignidad y reconocimiento, los espacios del mundo productivo.

Lidia Romero, compañera de la Red Hábitat Bolivia, compartió un testimonio profundamente situado en la experiencia cotidiana de las mujeres constructoras y en los obstáculos reales que enfrentan para sostener su trabajo y su autonomía económica. Desde su relato, quedó claro que la capacitación técnica no es solo una herramienta laboral, sino una estrategia de supervivencia, dignidad y fortalecimiento colectivo.

Explicó que, a partir de su experiencia, comprendió que "sola, como Lidia, no puedo lograr mucho, pero que si me reuno con más mujeres, y con organizaciones, nos fortalecemos". Muchas oportunidades laborales se pierden cuando los empleadores esperan que una mujer pueda resolver integralmente los problemas de una vivienda: reparar cerámica, arreglar grifería, identificar filtraciones, hacer revoques y recién después pintar. Frente a estas exigencias, Lidia relató cómo han tenido que aprender "de todo un poco", no por elección, sino por necesidad, para no perder trabajos y para demostrar que su trabajo es de calidad.



Foto: Lidia Romero

Desde ese aprendizaje, destacó el valor de la formación técnica continua y del trabajo asociativo. Su organización, una asociación de mujeres constructoras sin fines de lucro, ha logrado sostenerse gracias a su participación en pequeños proyectos que les han permitido acceder a capacitaciones. Con el tiempo, las mujeres formadas se han convertido en formadoras de otras mujeres, multiplicando el conocimiento y ampliando el impacto. L.Romero subrayó la importancia de abrir convocatorias permanentes, especialmente para mujeres jóvenes, y de renovar periódicamente la directiva de la asociación, como una forma de evitar personalismos, fortalecer liderazgos colectivos y dar oportunidades a nuevas compañeras.

En su intervención, remarcó que el trabajo de las mujeres en la construcción no es solo una cuestión económica, sino también una acción política y social. Señaló con firmeza que apoyar y contratar a una mujer implica apoyar a una familia entera, a generaciones de madres y abuelas que han sostenido los hogares. Desde esta perspectiva, llamó a no normalizar la violencia, ni la exclusión laboral, y a reconocer a las mujeres como sujetas fuertes, luchadoras y capaces de transformar su realidad.

Finalmente, L. Romero hizo un llamado a las organizaciones, instituciones y proyectos presentes a seguir apoyando estos procesos, no desde la caridad, sino desde el reconocimiento del potencial y la experiencia acumulada de las mujeres. Cerró su testimonio con gratitud hacia quienes han acompañado el camino recorrido durante más de quince años, reafirmando que la fortaleza de las mujeres está en ellas mismas, en su organización y en su decisión de no dejar pasar más la injusticia ni la violencia.

La presentación de Beatriz Cobo, subdirectora del Centro de la Construcción del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Valle, introdujo la experiencia del programa "Imparables: mujeres que transforman", una iniciativa creada en 2020 como respuesta directa a las violencias y barreras machistas que por años han excluido a las mujeres del sector de la construcción. B. Cobo explicó que el programa nació de su propia experiencia como mujer en un entorno profundamente masculinizado y del reconocimiento institucional de que la transformación debía comenzar desde la formación técnica y desde el territorio. El proyecto se estructura en tres componentes: formación, desarrollo social y desarrollo económico, concebidos para abrir oportunidades laborales reales, fortalecer la autonomía y permitir que las mujeres intervengan en su propio entorno.

En el primer componente, el SENA ofrece formación operaria, técnica y tecnológica en oficios asociados a la construcción, iniciando con grupos de mujeres que provienen de contextos de violencia intrafamiliar, drogadicción o extrema vulnerabilidad. Una característica central del modelo es la territorialización: en lugar de exigir que las mujeres acudan a los centros de formación, el SENA desplaza instructores y equipos a las comunas y barrios, habilitando espacios públicos como escenarios de aprendizaje. Esta metodología de "aprender haciendo" ha permitido que los procesos formativos no solo fortalezcan capacidades técnicas, sino que transformen físicamente los entornos donde viven las aprendices.

El segundo componente, el desarrollo social, incorpora apoyo psicosocial permanente y coordinación con alcaldías, gobernaciones y entidades de protección, con el fin de responder a las múltiples violencias y dificultades que atraviesan las mujeres participantes. El tercer componente, el desarrollo económico, impulsa la empleabilidad y el emprendimiento mediante alianzas con cámaras de infraestructura, constructoras y programas públicos de mejoramiento de vivienda, de modo que las mujeres puedan insertarse laboralmente o ejecutar obras de autoconstrucción y mejoras en sus propios hogares.

La intervención también resaltó el papel del Fondo de la Industria de la Construcción (FIC), que permite al SENA otorgar apoyos de sostenimiento equivalentes al 60 % del salario mínimo durante la formación y articular con alcaldías prácticas productivas remuneradas que refuerzan la empleabilidad. Gracias a ello, el programa ha capacitado a unas 3000 mujeres entre los 16 y 65 años, muchas de las cuales hoy trabajan en obras públicas, constructoras privadas o proyectos comunitarios. Cobo destacó los cambios culturales que este proceso ha generado: desde la resistencia inicial de algunos hombres hasta la consolidación de equipos mixtos que reconocen que el aporte femenino complementa, y no compite, la fuerza laboral masculina.

Luego, Ángela Ospina, una egresada como técnica en acabados arquitectónicos, relató cómo su paso por el SENA transformó su vida personal y profesional. Compartió los desafíos iniciales, la sorpresa de descubrir su propio potencial en un oficio históricamente negado a las mujeres, el orgullo de capacitarse de manera formal y ejercer con solvencia técnica. Subrayó el papel de la disciplina, la responsabilidad y el detalle, habilidades con frecuencia asociadas al trabajo femenino, como ventajas reales dentro del sector, al tiempo que agradeció el respaldo institucional que le permitió conciliar formación, maternidad y proyectos de vida.



Foto: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Diálogo abierto

Durante el diálogo con el público, surgió la preocupación por la salud mental de las constructoras y el riesgo de sobrecargar los liderazgos comunitarios femeninos. La representante de Bolivia, desde la experiencia de Red Hábitat, señaló que la combinación entre apoyo psicosocial, formación técnica, generación de ingresos y desarrollo artístico ha sido decisiva para reducir agotamiento y ansiedad. El arte, relató, se convirtió en un espacio de sanación profunda para muchas mujeres que participaron en talleres de cerámica con artistas latinoamericanas, mostrando que la reconstrucción emocional es inseparable de la autonomía económica. Cobo coincidió en que la integralidad del enfoque, habilidades técnicas, bienestar emocional, acceso a ingresos, reconocimiento comunitario, es lo que marca la diferencia en los procesos de transformación con perspectiva de género.

Para concluir, la conversación cerró con una invitación a ampliar el conocimiento sobre la oferta nacional del SENA, que hoy cuenta con 33 regionales, 118 centros especializados y programas gratuitos en modalidades presenciales y virtuales, incluyendo certificación de competencias, emprendimiento y convocatorias de financiación. Tanto Cobo como Ospina enfatizaron que el acceso a estas oportunidades puede cambiar vidas, no solo por la formación técnica, sino porque edifican autoestima, redes de apoyo y la convicción de que las mujeres pueden ocupar todos los espacios del mundo productivo, incluidas las obras de construcción.



Segundo Día:
Visita a la Comuna 15 y Mesas de Discusión

02

El segundo día fue pensado como una oportunidad de conocer mejor el proyecto MERA, en el terreno: conociendo uno de los barrios donde se desarrolla el proyecto en Cali, acercándose a las organizaciones de mujeres venezolanas y de la comunidad de acogida, y debatiendo entre los equipos de implementación del proyecto y ponentes, sobre las principales apuestas y retos del componente de acceso a un techo seguro de MERA.

Si bien se había proyectado inicialmente una suerte de tertulia entre participantes del seminario y actores de terreno, la visita de terreno de la mañana se enriqueció considerablemente gracias a las iniciativas de dos fuentes:

La Red Hábitat de Bolivia propuso realizar una actividad concreta de intervención en una obra de mejoramiento de vivienda de parte de la representante de la Asociación de mujeres constructoras, ASOMUC, Lidia Romero, en interacción directa con las mujeres beneficiarias de las comunidades. De esta manera, se podría hacer una demostración en vivo de la capacidad de las mujeres en el campo de la construcción o de la autoconstrucción y motivarlas para formarse en este campo. La fundación SIDOC por su lado, había previsto realizar una jornada de integración entre venezolanas y la comunidad de acogida, por medio de una acción ciudadana y restaurativa de un espacio público.

Un dialogo entre estas dos propuestas se realizó durante el proceso de preparación del seminario hasta lograr une fusión de ambos objetivos: la Fundación SIDOC adapto su programación de actividades para coincidir con el evento, diseñó un encuentro entre participantes del seminario y habitantes de un barrio, que fue seleccionado de manera participativa. El lugar preciso a restaurar fue igualmente seleccionado con las beneficiarias y la comunidad de acogida, de manera a permitir una intervención de Lidia Romero y de mujeres capacitadas por el SENA en un mural diseñado por una artista caleña. Las actividades restaurativas fueron facilitadas por la intervención previa de instituciones y servicios del municipio (en deportes) y por la empresa encargada de la limpieza del sector.

Jueves 13 de noviembre

Actividad colectiva en terreno

Acciones restaurativas del Parque Recreativo La Amistad, El Vallado II.

Calle 56 con Carrera 38, Comuna 15, Santiago de Cali: limpieza, siembra, pintura, actividad cultural, mural.

Con la participación de las líderes comunitarias:

- **Lidia Romero Alarcon,**
  Maestra de obra, Asociación de mujeres constructoras ASOMUC,
  La Paz, Bolivia
- **Catalina Solano,**
  Lideresa Red de Mujeres Ecuavella,
  Quito, Ecuador
- **Derlys Aurimar Marquez,**
  Lideresa Comuna 15,
  Cali, Colombia
- **María Elena Gil,**
  Lideresa Comuna 15,
  Cali, Colombia
- **Gloria Lucía Moreno,**
  Lideresa Comuna 15,
  Cali, Colombia
- **Diana Tenorio Caicedo**
  Muralista, TECA

Comuna 15, Cali – Parque Recreativo La Amistad

La jornada comunitaria del seminario inició con la bienvenida a todas y todos los participantes en el Parque Recreativo La Amistad, en la Comuna 15. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Carolina Arias, coordinadora del componente de vivienda segura del proyecto MERA, desde la Fundación Sidoc, quien resaltó el valor de estos espacios de encuentro, donde cada persona aporta "un poquito" para avanzar en la transformación colectiva del territorio.

A continuación, se dio paso a la intervención de Derlys Aurimar Márquez, lideresa de la Comuna 15, cuyas palabras marcaron el inicio de una reflexión profunda sobre la fuerza organizativa del barrio y el papel de las mujeres en la construcción del tejido comunitario. Posteriormente, intervino la delegada de la Alcaldía y de la Secretaría de Bienestar Social, quien destacó que el proyecto MERA "coloca a las mujeres en el centro, reconociendo tanto a las mujeres migrantes como a las mujeres de la comunidad de acogida". Subrayó la importancia de comprendernos como "personas del mundo, capaces de habitar otros espacios, de ser recibidas por distintos territorios y, al mismo tiempo, de transformarlos", recordando que las palabras de Derlys Aurimar resonaban en todas porque revelaban esas trayectorias de vida que buscan nuevas oportunidades.

En su intervención, enfatizó el valor del trabajo conjunto con MERA y la relevancia estratégica del proyecto Casa Matria Oriente, de la Alcaldía de Cali, para atención de violencias basadas en género y fortalecimiento para la autonomía económica. Es un sueño largamente esperado por las mujeres del distrito de Agua Blanca y apoyado por el proyecto:

> **"Gracias al compromiso de nuestro alcalde y a esta articulación, Casa Matria será una realidad para las mujeres del oriente de Cali: un espacio que las acogerá, las acompañará y promoverá iniciativas que fortalezcan sus proyectos de vida."**

Agradeció también a todas las personas y organizaciones que continúan fortaleciendo esta apuesta por el bienestar de las mujeres y el desarrollo territorial.

Rocío Gutiérrez, de la Fundación Sidoc, compartió un mensaje centrado en la importancia del lugar y de la comunidad anfitriona:

Agradeció también a todas las personas y organizaciones que continúan fortaleciendo esta apuesta por el bienestar de las mujeres y el desarrollo territorial.

Rocío Gutiérrez, de la Fundación Sidoc, compartió un mensaje centrado en la importancia del lugar y de la comunidad anfitriona:

> **"Esta cancha está ubicada en un sector con condiciones de alta vulnerabilidad, en pleno distrito de Agua Blanca. Esta zona de la ciudad se constituyó de manera informal hace muchos años, como resultado de desplazamientos y procesos de migración internos y externos."**

Describió cómo este territorio ha crecido a partir de la llegada de personas desde el Pacífico, el sur del país y otras regiones afectadas por la violencia, lo cual evidencia las profundas huellas del conflicto armado. Explicó las múltiples dificultades que persisten en la zona —riesgos de seguridad, presencia de economías ilegales y mujeres cabezas de hogar enfrentando desafíos diarios— y subrayó por qué las acciones de ciudadanía restaurativa son esenciales.

> **"La vivienda digna no es solo la casa, el baño o la cocina; también es un entorno digno: un parque donde mis hijos puedan jugar sin riesgo. Eso también es calidad de vida."**

Destacó la presencia de múltiples actores institucionales y comunitarios, así como el rol de la fundación Sidoc en sus 20 años de compromiso social y ahora acompañando al proyecto MERA. Invitó a las y los participantes a "ensuciarse un poquito las manos", a sembrar, pintar y dejar mensajes de transformación.

Expresiones culturales y voces comunitarias

La profesora de la escuela de baile del barrio abrió el espacio artístico celebrando la posibilidad de "seguir participando en espacios que aportan a la recuperación de la comunidad". Recordó que muchos de sus logros han nacido de procesos barriales similares y agradeció la presencia de quienes siguen creyendo en la capacidad colectiva de salir adelante.

El grupo Bomba Salsera, originario del barrio Mojica —también territorio de intervención de MERA— presentó un baile que representa a Cali a nivel internacional. Este conjunto de niñas y niños, formados por mujeres del sector que han sido campeonas mundiales, mostró el talento y la resiliencia cultural del oriente de la ciudad.

Entre las voces locales, Martha, integrante de la mesa de cultura de la Comuna 15, compartió un testimonio que conmovió al grupo:

> **"Es un honor estar aquí. La recuperación de los espacios de nuestra comuna es fundamental... Yo sí soy mamá orgullosa del sector de Agua Blanca: de ahí salieron mis hijas, una psicóloga y la otra, cinco veces campeona mundial de baile. Jóvenes: se puede salir adelante."**

El cierre de la mañana estuvo a cargo de Pastora Zuñigua y Lidia Romero, ponentes provenientes de Bolivia, quienes compartieron un mensaje profundamente inspirador:

> **"Compañeras mujeres luchadoras, muchas gracias. Lo importante es lo que vamos dejando. Hay que visibilizar el trabajo que hacemos las mujeres... En Bolivia enfrentamos un camino duro. Nos decían que no podríamos. Nos cerraron puertas. Pero cada 'no' nos hizo avanzar un paso más."**

Invitaron a las mujeres constructoras y pintoras a apropiarse de su oficio, a aprovechar la capacitación recibida y a no temer a los retos. Subrayaron el orgullo de portar el casco y el overol como símbolos de identidad profesional:

> **"El casco no es un disfraz. Es parte de nuestra identidad. Úsenlo con orgullo. Nuestras hijas y sobrinas nos están mirando."**

Su mensaje final convocó a las mujeres a seguir formándose, a "ser como una esponja", a tomar una especialidad y a comprender que su ejemplo transforma generaciones.

La mañana concluyó con un renovado sentido de comunidad, esfuerzo colectivo y fortalecimiento del liderazgo femenino en la Comuna 15. Las acciones desarrolladas dejaron huellas tangibles en el parque y, sobre todo, en las experiencias compartidas entre mujeres migrantes, residentes locales, organizaciones y actores institucionales, visitantes y participantes del seminario, comprometidos con la construcción de territorios, barrios y ciudades más seguras, dignas y solidarias.



Desarrollo de la jornada comunitaria

El equipo de la fundación Sidoc organizó a las y los asistentes, participantes del seminario y habitantes de la zona en cuatro grupos rotativos para ejecutar las actividades de recuperación del parque.

- **Grupo 1:** siembra de plantas
- **Grupo 2:** lijado y pintura de juegos en el piso
- **Grupo 3:** zona de alimentación
- **Grupo 4:** pintura de un mural

Cada grupo permaneció unos 15 minutos en cada estación antes de rotar, garantizando así la participación de todas las personas presentes en diferentes frentes. Estas acciones colectivas permitieron embellecer el parque, pintar juegos infantiles y fortalecer los lazos comunitarios, dando un piso más fuerte, visible y duradero sobre los beneficios concretos del proyecto para el conjunto de la población en la zona y no únicamente para personas de nacionalidad venezolana.



El mural comunitario

En la preparación del mural, un acercamiento al propietario de la vivienda cuya fachada se pensaba pintar permitió obtener su acuerdo. Unas mujeres capacitadas por el SENA en estuco y pintura hicieron la base en días anteriores.

En el mural se buscó representar la unión entre Colombia y Venezuela a través de su flora compartida y la importancia de la participación de las mujeres en el mejoramiento barrial y en la comunidad. Se eligió el árbol de guayacán, presente en ambos países, aunque con flores de distintos colores, como símbolo de conexión y diversidad. Es de anotar que, durante la actividad, se ha acercado una líder de un barrio informal vecino para conocer el proyecto. Gracias a su intervención, otro vecino permitió también que se pintara su fachada, demostrando así las ganancias de confianza y de integración entre comunidades hermanas, logradas por las mujeres de la comunidad.



Grupo 1: siembra de plantas.



Grupo 3: zona de alimentación



Grupo 4: Pintura del mural



Compañeras de Red Hábitat Bolivia avanzando en el mural.

Agenda de la tarde

La tarde del 13 de noviembre estuvo dedicada al desarrollo de mesas técnicas de debate, en las que participaron activamente las y los asistentes al seminario, los equipos institucionales responsables del proyecto MERA y las personas ponentes invitadas. Estos espacios fueron concebidos como momentos de trabajo colectivo orientados a profundizar los intercambios iniciados en las sesiones plenarias y a contrastar enfoques, experiencias y aprendizajes en torno a la implementación del proyecto.

Las temáticas abordadas en las mesas fueron definidas previamente en reuniones preparatorias con los equipos encargados del componente de acceso a una vivienda segura para mujeres venezolanas y comunidades de acogida en Cali y Quito. En dichas reuniones se identificaron los principales nudos críticos, desafíos metodológicos y preguntas emergentes del carácter piloto y experimental del proyecto. Este carácter experimental se sustenta, en particular, en la articulación de distintos componentes temáticos y en la incorporación de la estrategia Housing First como un enfoque que permite facilitar el acceso progresivo a otros derechos y servicios, tales como empleo, generación de ingresos, salud, prevención y atención de violencias de género, así como acciones para la reducción de la xenofobia.

Durante las mesas, se compartió cómo los equipos de implementación han diseñado metodologías propias a partir de sus trayectorias y contextos locales, al mismo tiempo que han debido formular nuevas apuestas que implican procesos de innovación institucional y social. En este sentido, uno de los objetivos centrales del seminario fue abrir un espacio de diálogo horizontal con expertas y expertos de distintos países y campos de acción, así como con las y los participantes, para debatir colectivamente sobre estas nuevas apuestas, los interrogantes que generan y las tensiones que surgen en su puesta en práctica.

Las discusiones permitieron contrastar las metodologías experimentadas en MERA con experiencias desarrolladas en otros contextos nacionales, identificar aprendizajes transferibles y reconocer límites y desafíos comunes. Las preguntas y temáticas trabajadas en cada mesa surgieron directamente de estos procesos previos de reflexión y fueron retomadas durante la sesión como insumos clave para la sistematización y el fortalecimiento del proyecto.

Para cada temática se contó con una facilitadora experta, encargada de orientar la discusión en función de su campo de especialización y de sistematizar las principales lecciones aprendidas para su presentación en la jornada siguiente. Las preguntas que guiaron el debate fueron previamente diseñadas por el equipo organizador del seminario y ajustadas por cada facilitadora según las dinámicas de la mesa:

1. **La habitabilidad de la vivienda en arriendo en sectores populares de la ciudad:**

   Facilitadora Daniela Nuñez Ruiz.

   ¿Qué es una vivienda arrendada segura y adecuada para las mujeres, en diferentes contextos urbanos y sociales? ¿Cómo la reflexión sobre la vivienda adecuada, en relación con las relaciones de género y la ciudad, puede inspirar nuevas formas de intervención? Este debate abre la discusión sobre múltiples obstáculos que deben ser superados, como la insalubridad, el hacinamiento, las violencias de género en el espacio privado y público, la falta de contratos formales, la "sexortorsión", el pago diario, la sobrecarga de cuidados no remunerados, las dificultades de movilidad y las limitaciones en la toma de decisiones.

2. **La adaptabilidad del proyecto a las necesidades y el empoderamiento de las "mujeres echando raíces"**

   Facilitadora Verónica Jaramillo.

   Las usuarias o actoras del proyecto presentan perfiles diversos , mujeres en movilidad humana, población de acogida, en retorno, de distintas nacionalidades, con trayectorias y necesidades diferenciadas. Frente a esta diversidad, ¿el proyecto debe seleccionar viviendas y población con perfiles que le permitan cumplir con los indicadores de sus resultados esperados, o puede y debe adaptarse al público y a realidades inesperadas para generar procesos reales de empoderamiento de las mujeres? ¿Es posible aceptar críticas, cambiar reglas y criterios de manera flexible? ¿Cuál es el papel de las mujeres empoderadas y de sus organizaciones: son únicamente usuarias del proyecto o actoras del mismo?

3. **¿Cuál relación entre el componente de mejoramiento de vivienda de MERA y la normativa existente, y política pública de vivienda social y mejoramiento barrial?**

   Facilitadora Rosa Elena Donoso.

   ¿Cómo los mejoramientos de vivienda impulsados por el proyecto MERA pueden relacionarse con las políticas locales y nacionales que atienden problemáticas como zonas de riesgo, informalidad en la tenencia de la tierra, déficits de servicios, insalubridad grave o falta de transporte? ¿De qué manera estas acciones pueden aportar a la construcción de una "ciudad incluyente", con vivienda social e infraestructura adecuadas y accesibles, tanto desde el nivel nacional como a escala local?

4. **¿Como adaptar el enfoque "housing first" al contexto de MERA, articulando componentes?**

   Facilitadora Marie Dominique de Suremain.

   En esta mesa se profundiza la relación entre los distintos componentes temáticos del proyecto, interrogando cómo la vivienda arrendada segura puede funcionar como facilitadora del acceso a otros derechos y servicios, y cómo, a su vez, los otros componentes del proyecto pueden facilitar el acceso y la permanencia en un techo seguro.

5. **Constituir una red de arrendadores y sensibilizar a la comunidad de acogida.**

   Facilitadora: Valeria Loaiza.

   La mesa trata de recoger experiencias vinculadas a la conformación de redes y a la identificación de una oferta de propietarios dispuestos a formalizar la relación con las y los inquilinos, en esquemas de confianza y beneficio mutuo. ¿Cómo construir relaciones "ganar–ganar" que incluyan garantías para ambas partes y beneficios económicos y legales, como subsidios, pagos anticipados o mejoramientos físicos? ¿Cómo identificar esta oferta y hacerla efectiva, y en qué medida es posible adaptar herramientas desarrolladas en otros proyectos?



Tercer Día:
Relatoría de Mesas de Discusión

03

Jueves 13 de noviembre

Plenaria y restitución de mesas técnicas del día 2

- Buenas prácticas y soluciones concretas para MERA y para las políticas públicas locales y nacionales de los países participantes.
- Exposición de 10 mins por las 5 facilitadoras de las mesas técnicas del día 2 y lideresas
- Intercambios con el público (10 mins después de cada restitución)

La sesión de la relatoría de mesas de discusión fue facilitada por Esperanza Gonzales, coordinadora del proyecto MERA en Cali.



Mesa #1

La habitabilidad de la vivienda en arriendo con perspectiva de género en sectores populares de la ciudad.

Facilitadora: Daniela Núñez, ONU-Hábitat.

La facilitadora abrió la sesión destacando la diversidad de perfiles participantes: integrantes del equipo técnico del proyecto MERA, representantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, así como colegas provenientes de Francia y Bolivia. Esta pluralidad permitió un intercambio amplio y enriquecedor. En la mesa participaron Diana, Flora, Tatiana, Diana, Mayra, Solen, Pastora y Juan, quienes aportaron desde sus conocimientos técnicos y también desde experiencias personales de migración.

La metodología se estructuró en dos momentos: primero, la identificación de desafíos y barreras para el acceso a vivienda en renta para mujeres populares y migrantes; segundo, la construcción colectiva de estrategias territoriales para atender estas demandas.

Uno de los participantes, resaltó cómo la conversación se nutrió tanto de perspectivas teóricas como de vivencias directas de migración, lo cual permitió comprender con mayor profundidad las vulnerabilidades que enfrentan las mujeres en contextos urbanos precarizados.

Entre los retos identificados, el más reiterado fue el acceso a vivienda en condiciones precarias, asociado a la falta de seguridad física y a no contar con elementos básicos en los espacios privados, como baños o zonas seguras. A esto se suma la desigualdad económica, que se expresa en altos costos de alquiler, requisitos excesivos para arrendar y la amplia presencia de mujeres en empleos informales que, además de ser inestables, muchas veces ponen en riesgo su integridad.

Otro obstáculo relevante es la desconfianza institucional, vinculada a la falta de información y al desconocimiento de derechos y rutas de acceso a vivienda digna. Esto se agrava con las trayectorias migratorias complejas, que generan elevado desgaste emocional, desarraigo y tensiones entre reparación y adaptación.

Los territorios a los que suelen llegar las mujeres migrantes también presentan desafíos estructurales: inseguridad, falta de servicios, conflictos armados o dinámicas sociales hostiles, incluyendo expresiones de xenofobia, en especial en zonas como la Comuna 15.

A partir de esta lectura del contexto, la mesa propuso una serie de estrategias clave. La primera fue fortalecer enfoques multisectoriales e integrales que articulen dimensiones sociales, territoriales, laborales y culturales para promover la inclusión socioeconómica de las mujeres.

También se mencionaron experiencias internacionales sobre modelos de vivienda social y cooperativa: desde Bolivia, se compartió el funcionamiento de comités que apoyan la búsqueda de arrendamientos y, desde Francia, prácticas para fortalecer la integración mediante vivienda en alquiler asequible.

Las redes comunitarias surgieron como una herramienta central para el sostenimiento de las mujeres migrantes: tejidos para acceder a empleo, formarse, emprender y resolver necesidades cotidianas. Asimismo, se enfatizó la necesidad de consolidar alianzas entre organizaciones públicas e internacionales para promover vivienda social y generar continuidad institucional. Esto último fue señalado como crítico, debido a la alta rotación de personal estatal, que interrumpe procesos y aprendizajes; por ello se resaltó la importancia de que quienes participan en estos espacios asuman el compromiso de dar continuidad a los avances logrados.

Durante la discusión emergió también el reconocimiento de las formas particulares de habitar en zonas de urbanización popular, que se diferencian del resto de la ciudad debido a su origen histórico y a la acción colectiva de mujeres que sostuvieron estos barrios mediante redes de apoyo mutuo. En estos territorios, muchos cuidados —como el acceso al agua, electricidad, alimentación o infraestructura básica— se organizaron de manera solidaria, generando espacios y servicios colectivos que aún hoy persisten, como lavaderos, cocinas o espacios comunes.

Este reconocimiento llevó a plantear la necesidad de políticas de vivienda y habitacionales más contextuales y sensibles a las prácticas comunitarias, entendiendo que los cuidados no deben estar confinados al espacio doméstico, sino que pueden concebirse como servicios urbanos, tales como cocinas y lavanderías colectivas o guarderías barriales.

Finalmente, se discutieron experiencias de salud mental comunitaria, destacando estrategias solidarias en las que las mujeres se acompañan, comparten recursos y generan resiliencia. Se mencionó el caso de Cali, donde se han implementado lavadoras comunitarias como dispositivo que facilita la vida cotidiana de las mujeres migrantes y promueve vínculos de apoyo emocional. A su vez, participantes venezolanas compartieron cómo los cuidados se organizan en sus comunidades de origen, reforzando la importancia de estos espacios compartidos desde una perspectiva psicosocial.

La conversación evidenció la urgencia de pensar políticas habitacionales que integren cuidados, redes sociales, inclusión socioeconómica y salud mental, reconociendo las prácticas comunitarias como una clave fundamental para abordar las necesidades de las mujeres en contextos de vivienda popular y migración.

Mesa #2

La adaptabilidad del proyecto a las necesidades y el empoderamiento de las "Mujeres echando raíces".

Facilitadora: Verónica Jaramillo.

La sesión inició con un reconocimiento a la importancia del acompañamiento emocional y cotidiano que las mujeres construyen entre sí a través de redes comunitarias. Estas redes permiten que las recién llegadas encuentren un entorno de acogida y soporte, aun antes de acceder a servicios formales. La facilitadora destacó que esta dimensión relacional es fundamental para comprender cómo debe adaptarse el proyecto a las necesidades reales de las mujeres participantes.

La discusión se centró en revisar de manera crítica el proyecto actual, entender sus fortalezas y limitaciones e identificar aprendizajes provenientes de experiencias internacionales. Se desarrolló un ejercicio de diagnóstico que incluyó buenas prácticas, elementos de política pública y áreas de mejora. A partir de ello, se construyeron aprendizajes propios para orientar la adaptación del proyecto hacia una implementación más integral y contextualizada.

Un primer punto señalado fue que, al tratarse de una prueba piloto que opera en dos países con marcos institucionales distintos, es esperable que existan diferencias en tiempos, respuesta institucional y capacidad operativa. Sin embargo, la mesa enfatizó que esta diversidad también ofrece una oportunidad para identificar prácticas valiosas, complementarias y transferibles.

Entre los aprendizajes centrales, se subrayó la importancia de garantizar la transversalidad y simultaneidad de los tres componentes del proyecto MERA. Aunque por razones organizacionales los componentes no iniciaron al mismo tiempo, las participantes resaltaron que la mujer que ingresa al programa debería recibir, de forma paralela, la capacitación del componente uno, los beneficios del componente dos en vivienda y alquiler y los procesos de empoderamiento del componente tres. Esto evitaría riesgos de revictimización, permitiría continuidad pedagógica y contribuiría a que las mujeres refuercen medios de vida desde el inicio.

La mesa identificó la necesidad de activar el componente tres, empoderamiento femenino, desde el arranque del proyecto, acompañando los procesos de capacitación, asistencia para alquiler e inserción económica. Si bien ahora se vienen desarrollando acciones en esta línea, se consideró que su articulación temprana fortalecería la integralidad del modelo.

Otro punto clave fue el enlace institucional. Se destacó el caso de Cali como una buena práctica, donde la colaboración estrecha con la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Género y otras instancias municipales ha permitido construir un lenguaje común, coordinar acciones, compartir responsabilidades y tomar decisiones conjuntas en los comités de asignación. Este trabajo articulado, descrito como "bajo la bandera de esperanza", facilita que las participantes reciban los beneficios del componente uno con acompañamiento del componente tres y que las instituciones garanticen respuestas oportunas. En el caso de Ecuador, se señaló la importancia de institucionalizar prácticas dentro de los organismos públicos que ya tenían un recorrido antes de iniciar el proyecto. Poder identificar y evidenciar la potencia de ciertas rutas de atención y las buenas prácticas a nivel local permite reforzarlas, mejorarlas y justificar su existencia ante los eventuales cambios políticos.

Asimismo, se reconoció la importancia de extender la mirada familiar en la evaluación de necesidades. Muchas participantes llegan con hijos, hijas, adolescentes, personas mayores o parientes con condiciones específicas producto de trayectorias migratorias y rupturas. Se resaltó como buena práctica que el proyecto atienda, cuando es posible, necesidades educativas, de regularización o protección para niños, niñas y adolescentes, aun cuando estos no sean el foco central. La presencia de equipos aliados en las subsecretarías contribuye a ampliar el alcance de la intervención y garantizar respuestas integrales.

También se mencionó que la proximidad territorial y la coordinación con actores locales son fundamentales para que la comunidad perciba que el proyecto no actúa de manera aislada, sino en conjunto con la institucionalidad. Esto fortalece la confianza, facilita el acceso y mejora la sostenibilidad de las intervenciones.

La mesa abordó después el valor de la incidencia comunitaria y la participación en políticas públicas. Se destacó que las organizaciones de base comunal y las organizaciones de la sociedad civil pueden ser una "punta de lanza" para dialogar con instituciones y aportar al seguimiento, reformulación y continuidad de políticas públicas. Se insistió en que la construcción de política debe involucrar a la comunidad desde el inicio, evitando que la participación sea solo consultiva o limitada a la implementación. Una política efectiva requiere que los territorios puedan generar retroalimentación directa sobre lo que funciona o no y que exista memoria institucional para evitar que los avances se pierdan ante cambios administrativos.

Por último, en respuesta a inquietudes sobre el componente tres, se aclaró que la transversalización es, a la vez, una práctica en construcción y una recomendación estratégica. Tras escuchar las experiencias del componente uno y revisar los tiempos de caracterización y evaluación, se concluyó que este seguimiento debe iniciar desde el primer contacto con las mujeres, para identificar riesgos, activar respuestas ante violencias basadas en género y fortalecer procesos de liderazgo desde etapas tempranas.

La mesa cerró subrayando que el trabajo conjunto entre sector público, privado, organizaciones comunitarias y cooperación internacional es clave para consolidar políticas habitacionales y

48

de inclusión que respondan a las necesidades de mujeres migrantes, sobrevivientes de violencia y receptoras de las comunidades de acogida. El desafío es asegurar continuidad, sostenibilidad y corresponsabilidad institucional para que las acciones del proyecto trasciendan la temporalidad de un piloto y fortalezcan de manera permanente la vida de las mujeres y sus familias.



Mesa #3

El componente de mejoramiento de vivienda de MERA como contribución a la política pública de vivienda social y mejoramiento barrial en Cali y Quito.

Facilitadora: Rosa Elena Donoso.

La facilitadora, Rosa Elena Donoso, abrió el espacio destacando la diversidad de actores presentes en la mesa de discusión: representantes de cooperativas, organizaciones de cooperación internacional, entidades públicas como la Secretaría de Vivienda de Cali y el Gobierno Provincial de Pichincha, así como equipos técnicos locales y comunitarios. La dinámica integró a dos mesas de trabajo que compartían preocupaciones comunes relacionadas con arrendadores, arrendatarios y las limitaciones normativas que influyen en la calidad del hábitat.

Se motivó el inicio de la conversación en la mesa, con la explicación de la compañera de la Fundacion Sidoc, para que comparta cómo opera actualmente el mejoramiento de vivienda en MERA, en Cali, donde el proyecto actúa en barrios como la Comuna 15. Se detalló el proceso de identificación y perfilamiento de las viviendas, que permite establecer qué tipo de mejoras son viables según la normativa interna del programa. Las intervenciones previstas incluyen acabados, reparaciones de pisos, baños y tuberías, excluyendo reforzamientos estructurales o ampliaciones, es decir, se trata de mejoras cualitativas en espacios privados que están en arriendo para personas en movilidad humana.

Se destacó que en Cali el acceso al programa se realiza mediante un trabajo comunitario que permite identificar arrendadores dispuestos a habilitar mejoras en sus inmuebles. Esta relación depende tanto de criterios técnicos como de una negociación social con propietarios y arrendatarios. En el caso de Quito, representantes de AVSI explicaron que el enfoque es distinto: el componente de asistencia no parte necesariamente del mejoramiento físico, sino de la atención a las necesidades de las personas beneficiarias, para lo cual están consolidando una base de datos de arrendadores y arrendatarios.

Además de las mejoras en el ámbito privado, se resaltó la importancia del avance del espacio público como parte del hábitat integral. Se mencionó como ejemplo la intervención realizada el día anterior, donde la comunidad, el programa MERA y el municipio colaboraron para limpiar áreas públicas y mejorar la seguridad y el entorno. Estas acciones muestran el potencial de articulación entre comunidad, cooperación internacional y gobiernos locales para combatir estigmas como la xenofobia y para fortalecer la convivencia barrial.

Una participante de la sociedad civil, recién incorporada a los procesos, compartió su testimonio subrayando un hallazgo central del diálogo: los fondos públicos no pueden invertirse en bienes privados, incluso si en ellos viven migrantes en condiciones precarias. Expresó su reconocimiento al rol de organizaciones y programas como MERA, que permiten superar ese vacío mediante mecanismos alternativos e intermediación social. También ofreció las capacidades de su cooperativa para sumarse a estos procesos desde la sociedad civil organizada.



Mesa #4

Cómo adaptar el enfoque Housing First al contexto de MERA, y otros contextos, articulando componentes.

Facilitadora: Marie-Dominique de Suremain.

La mesa inició con un reconocimiento colectivo a la importancia del espacio de diálogo. Las y los participantes expresaron gratitud por la posibilidad de compartir experiencias diversas —desde lo comunitario, lo administrativo, lo público y lo privado— y por la oportunidad de identificar un propósito común: fortalecer procesos de vivienda y hábitat mediante la articulación interinstitucional. Desde el comienzo se resaltó que este tipo de encuentros permite aprender mutuamente y genera compromisos para mantener una red activa que dé continuidad a las iniciativas en curso.

Uno de los temas centrales discutidos en la mesa fue el papel de la cooperación internacional. Se señaló que, aunque existen alianzas entre sectores públicos y privados, los recursos de cooperación siguen siendo fundamentales para impulsar proyectos que buscan garantizar el acceso a vivienda digna. Las y los participantes coincidieron en que estos programas no deben quedarse como pilotos aislados, sino consolidarse para demostrar impactos en territorio y abrir la puerta a que otros países o ciudades puedan replicarlos.

Durante el diálogo se insistió en la importancia de la articulación entre sector público, sector privado y comunidades. Varias intervenciones advirtieron que de poco sirven las políticas urbanísticas, los planes de desarrollo o los de ordenamiento si no se conectan con las realidades territoriales y con los actores clave, entre ellos los propietarios que alquilan sus viviendas. La mesa sostuvo que excluir a los arrendadores y arrendatarios en los procesos de política pública genera un vacío significativo, en especial en contextos donde buena parte de la población más vulnerable vive alquilando.

Otro eje fuerte del debate fue el marco normativo. Se compartió que cada localidad cuenta con reglas específicas que, en muchos casos, no conversan con la necesidad de ampliar las opciones de oferta habitacional. La mesa identificó la urgencia de gestionar flexibilizaciones legales que permitan incluir diversas modalidades, como viviendas en arriendo, compartidas, temporales o de paso. La comparación entre experiencias internacionales (como Francia o Uruguay) y prácticas locales permitió identificar puntos comunes: existen múltiples alternativas para garantizar vivienda digna, pero la normativa vigente a menudo las limita.

A partir de este punto, surgió la necesidad de posicionar el tema en la agenda pública. Las y los participantes plantearon que es indispensable armonizar los marcos administrativos con los lineamientos internacionales y constitucionales en materia de derechos humanos, recordando que la vivienda garantiza otras dimensiones fundamentales para la vida, en especial para mujeres, familias diversas y personas migrantes. También se reflexionó sobre la importancia de reconocer que el concepto de familia ha cambiado: ya no se reduce a un modelo nuclear, sino que incluye configuraciones complejas que exigen respuestas habitacionales flexibles.

La mesa profundizó también en el tema del arriendo y la desinformación existente, en particular en Colombia. Se señaló que muchos propietarios desconocen sus obligaciones y muchos arrendatarios desconocen sus derechos, lo que facilita abusos, encarecimiento injustificado de los alquileres y condiciones de habitabilidad deficientes. Se insistió en la necesidad de difundir el marco normativo vigente, aunque sea restrictivo, para empoderar tanto a arrendadores como a inquilinos y comenzar a corregir las distorsiones del mercado.

Varios aportes coincidieron en la importancia de pensar la habitabilidad como un estándar mínimo necesario para garantizar viviendas adecuadas. Se mencionó que en algunos países existen mecanismos como la "cédula de habitabilidad", que certifica que un inmueble cumple condiciones básicas, agua potable, ventilación, instalaciones seguras, antes de ser arrendado o vendido. La mesa identificó esta idea como una referencia útil para explorar modelos adaptados a los contextos locales, donde ya existen vacíos significativos: por ejemplo, se recordó que en Ecuador la habitabilidad solo se exige para vivienda nueva, sin control sobre las residencias usadas que se arriendan masivamente.

Se discutió además la distancia que a veces existe entre el derecho y el territorio. Aunque las constituciones reconocen el derecho a la vivienda, su aplicación suele estar limitada por prácticas administrativas rígidas o por interpretaciones que dejan fuera las necesidades reales de las comunidades. Participantes con experiencia en Uruguay señalaron que muchos hábitos institucionales se aplican "porque siempre ha sido así", sin un sustento superior que impida su modificación. Esto abre oportunidades para ajustar criterios administrativos a favor de la protección de inquilinos y de la mejora de condiciones habitacionales.

La mesa también reflexionó sobre el aprendizaje de experiencias anteriores en políticas de vivienda social. Representantes de Cali compartieron casos donde proyectos de morada prioritaria o en altura han resuelto necesidades inmediatas, pero han generado problemas sociales a largo plazo, recordando que la vivienda nunca debe pensarse de forma aislada del territorio ni de la vida comunitaria. Se enfatizó la necesidad de documentos de aprendizaje y lineamientos que permitan evitar errores pasados.

Finalmente, desde Medellín se aportó un análisis clave sobre el mercado formal e informal del arriendo. Se describió cómo, en algunos sectores afectados por riesgos naturales, la población migrante se ve obligada a alquilar viviendas controladas por actores ilegales, bajo condiciones precarias y en zonas de alto

riesgo. Aunque sería deseable prohibir el arriendo en lugares inseguros, la mesa reconoció que, si se eliminara esa oferta, muchas familias quedarían sin alternativas por falta de opciones accesibles. Por ello, se propuso avanzar hacia mecanismos que al menos regulen aspectos como el precio justo y fomenten información clara para todos los actores, reconociendo las múltiples dinámicas del mercado, incluidas modalidades como la vivienda compartida.

La sesión cerró con un reconocimiento al valor del espacio de diálogo, que permitió visibilizar esfuerzos en distintos territorios y reafirmar la importancia de avanzar colectivamente en un tema que cruza dimensiones urbanas, sociales, de género y de movilidad humana.



Mesa #5

Constituir una red de arrendadores, definir mejoras, garantías y subsidios, sensibilizar a la comunidad de acogida.

Facilitadora: Valeria Loaiza, AVSI.

La mesa facilitada por Loaiza reunió a seis participantes provenientes de Ecuador, Uruguay, Francia y Colombia, lo que permitió comparar dinámicas territoriales muy distintas. Desde el inicio surgió sorpresa por parte de quienes venían de otros países frente a ciertos datos sobre vivienda y movilidad humana en Ecuador, así como interés por comprender cómo este país ha avanzado en la construcción comunitaria de respuestas donde el Estado tiene una presencia limitada. La conversación partió de un reconocimiento: en las cuatro mesas técnicas realizadas antes se habían identificado problemas, barreras y desafíos comunes, así como diferencias marcadas entre países, y precisamente la red de arrendadores emerge como una respuesta concreta frente a la ausencia de políticas públicas de vivienda y a la necesidad de fortalecer convivencia e integración.

Uno de los ejes centrales de la discusión fue el análisis de las barreras estructurales que enfrentan mujeres, migrantes y hogares monoparentales en el acceso a la vivienda. Participantes coincidieron en que la ausencia de políticas sostenibles ha trasladado la responsabilidad a las comunidades, organizaciones de base y cooperación internacional, que han debido crear alternativas donde deberían existir políticas públicas. Entre las barreras más visibles se señalaron la xenofobia, la discriminación hacia mujeres migrantes o jefas de hogar, la estigmatización territorial y las condiciones precarias del mercado informal de alquiler.

En este contexto, la red de arrendadores aparece como una estrategia posible: no un modelo ideal, sino una herramienta construida colectivamente, en permanente ajuste, que hoy constituye la respuesta más funcional disponible. Loaiza recalcó que la red opera en articulación con organizaciones territoriales, instituciones públicas y comunidades locales, y que esta vinculación es clave: "la actividad realizada el día anterior por compañeras de Sidoc en el Parque de la Amistad fue un ejemplo claro de cómo la vida comunitaria se activa cuando los proyectos se insertan en el territorio. Hubo presencia de vecinos, niños, arrendadores potenciales e instituciones, mostrando que la convivencia puede convertirse en un soporte real para la vivienda segura". La mesa subrayó que los problemas sociales afectan por igual a personas de distintas nacionalidades y que la convivencia se fortalece cuando las comunidades se reconocen como parte de un mismo tejido social.

Al explicar su funcionamiento, V. Loaiza describió la red de arrendadores como una base de datos construida territorialmente, que recoge oferta de viviendas privadas disponibles y articulables con mujeres participantes del proyecto. La red se organiza alrededor de cuatro aristas principales: la focalización de arrendadores, la identificación de viviendas y adecuaciones necesarias, la sensibilización de propietarios y el acompañamiento institucional. La focalización se realiza a través de líderes comunitarios, espacios barriales, actividades públicas, referencias y el "voz a voz". En Ecuador, este proceso ha demostrado eficacia porque permite que el vecino conozca el proyecto, entienda su propósito y se acerque con disposición genuina. En cambio, cuando en las primeras conversaciones se evidencian actitudes de rechazo o xenofobia, se reconoce que ese perfil no es adecuado para formar parte de la red.

La dimensión de adecuaciones habitacionales fue otro punto importante. No todas las viviendas incluidas en la red reciben mejoras: primero se evalúan sus condiciones, se identifican las carencias y se establece un trabajo conjunto entre institución, arrendador y arrendataria. La mujer debe estar informada en todo momento sobre la transformación que se realizará en la vivienda y sobre los documentos que se firmarán, entre ellos, acuerdos que prohíben el incremento del canon de alquiler mientras dura el apoyo. Esta claridad ha permitido proteger a las mujeres de prácticas abusivas y fortalecer la corresponsabilidad en el uso y cuidado de la vivienda.

La mesa también abordó el fortalecimiento de la red de protección local. En varios territorios, como señalaba una participante desde Medellín, muchos caseros no conocen sus responsabilidades ni los servicios disponibles en la comunidad. Por ello, la pedagogía sobre derechos, deberes y convivencia se ha convertido en un componente fundamental del proceso. Los equipos han identificado que, en muchos casos, las propias viviendas de los dueños están en condiciones precarias, pero aun así están dispuestos a integrarse y facilitar espacios para mujeres con necesidad urgente de alojamiento.

En la conversación emergió la importancia del contexto histórico en el que nació la idea de la red. La estrategia se originó en Ecuador en 2019, en plena crisis migratoria, cuando cerca de 5000 personas ingresaban diariamente por la frontera con Colombia. Ante la falta de respuesta estatal y la existencia únicamente de albergues temporales, surgió la necesidad de construir alternativas que no dependieran solo de recursos de emergencia. A partir de ese momento, el modelo ha evolucionado mediante prueba y error, adaptándose a las dinámicas de cada territorio. Loaiza explicó que en Quito, por ejemplo, las dinámicas son distintas entre Calderón, al norte, y el sur de la ciudad, lo que obliga a ajustar el funcionamiento de la red según características sociales y urbanas propias de cada zona.

Un aspecto debatido fue la sostenibilidad del modelo. La red no solo se compone de una base de datos: implica garantías sociales, vínculos de confianza entre institución y arrendadores y un seguimiento continuo. Se destacó la importancia de que las instituciones públicas conozcan y utilicen esta herramienta, de

modo que pueda integrarse a políticas estatales de vivienda. También se subrayó que la informalidad del mercado es demasiado alta: en una zona con alrededor de 350 000 habitantes, solo 80 viviendas tienen contratos formales, lo que evidencia la urgencia de mecanismos de regulación y pedagogía para dueños e inquilinas.

Finalmente, la conversación concluyó que, aunque la red de arrendadores pueda sonar ideal en una presentación, en la práctica implica múltiples retos, tensiones y ajustes permanentes. No obstante, es una metodología que ha demostrado capacidad de evolución y adaptación desde 2019 y que hoy constituye una vía real para garantizar el acceso a vivienda digna como punto de partida para la reconstrucción de vidas y comunidades.

Preguntas y retroalimentación del público

El vínculo entre mejoramiento de vivienda y política pública fue un punto recurrente de debate. Representantes de la Secretaría de Vivienda de Cali explicaron que los programas municipales de mejoras existen, pero solo están dirigidos a personas propietarias que habitan su domicilio. Esto excluye por completo los arrendamientos y, en particular, los inquilinatos, una tipología frecuente en Colombia y Ecuador. Como se recordó en la mesa, estos últimos no son apartamentos formales, sino conjuntos de cuartos donde se comparte baño o cocina y cuyos propietarios suelen ser personas de bajos recursos. La normativa impide que este tipo de inmuebles reciba inversión pública para mejoras, aun cuando albergan a gran parte de la población más vulnerable, incluidos migrantes.

Las y los participantes enfatizaron que las políticas locales y nacionales continúan guiándose por el paradigma de la vivienda en propiedad como objetivo principal. Sin embargo, los datos muestran que entre el 40 y el 60 % de los hogares urbanos viven en alquiler, lo que evidencia un desfase importante. También se discutió la necesidad de actualizar la forma en que los censos registran las modalidades de tenencia, ya que estas han cambiado y se han diversificado, mientras que los instrumentos de medición siguen repitiendo metodologías de hace décadas.

Durante el espacio de preguntas y comentarios del público, se abrió una conversación amplia sobre los componentes centrales del proyecto y, en particular, sobre la conformación y el funcionamiento de la red de arrendadores.

La primera inquietud estuvo orientada a profundizar en el proceso de sensibilización que se realiza con quienes integran la red. La respuesta permitió detallar que esta es una fase clave antes de que un propietario forme parte del modelo. En esta etapa se abordan varios temas esenciales: la presentación del proyecto, la comprensión de los siete elementos de la vivienda adecuada, la prevención de la violencia de género, el acceso a vivienda digna y las obligaciones y derechos que intervienen en una relación de arriendo. Se subrayó que muchas personas desconocen la importancia de los contratos o los servicios de protección disponibles en su propia comunidad, por lo que este proceso también permite identificar necesidades adicionales y articular apoyos familiares y comunitarios.

El diálogo derivó en un interés por comprender la composición de la red, especialmente en relación con la participación de migrantes y personas locales. Desde la experiencia expuesta, se mostró que los porcentajes de atención se han ido equilibrando con el tiempo, transitando de un predominio de atención a población migrante hacia una distribución más equitativa que ha permitido mejorar la convivencia e integración. Se compartieron ejemplos de resistencias iniciales, en particular frente a estigmas hacia mujeres migrantes, y cómo el proyecto ha contribuido a transformar percepciones, aclarar malentendidos y abrir oportunidades conjuntas.

Otro aspecto señalado por el público se relacionó con el enfoque de "compartir riesgos", una idea presente en modelos como Housing First. La pregunta buscaba entender cómo el proyecto aborda los riesgos que pueden enfrentar tanto los arrendadores como las arrendatarias, sobre todo en contextos donde una enfermedad, la pérdida del empleo o ingresos inestables pueden interrumpir el pago del arriendo. La respuesta señaló que, aunque el proyecto ofrece una asistencia temporal acotada, se trata de un proceso informado: ambas partes conocen los alcances de la institución, sus límites y las opciones de acompañamiento disponibles. También se destacó que el apoyo económico, aunque breve, ha sido decisivo para que muchas mujeres estabilicen su situación, ahorren o reorganicen sus recursos para continuar su vida autónoma. De igual manera, se enfatizó que la red de caseros no es un modelo ideal ni definitivo, sino un proceso en construcción que requiere ajustes, en especial en la articulación con servicios de protección locales y en la ampliación de políticas públicas que permitan extender los periodos de apoyo económico, como ocurre en otros países.

Las experiencias compartidas desde Cali permitieron ilustrar los retos y aprendizajes en la conformación del llamado "banco de propietarios". Se narró como, ante retrasos en la llegada de beneficiarias, el equipo inició la identificación de viviendas y dueños disponibles, sensibilizándolos sobre arriendo digno. Aunque este proceso generó una base inicial amplia, con el tiempo se evidenciaron desafíos como pérdida de contactos, domicilios que dejaron de estar disponibles o unidades que no cumplían con criterios de habitabilidad. No obstante, se destacó la articulación lograda entre beneficiarias y propietarios ya vinculados, quienes han suscrito contratos con condiciones claras, incluyendo cláusulas flexibles frente a imprevistos. También se compartió que la pedagogía se ha fortalecido a través de metodologías novedosas, como cursos por WhatsApp, que pronto se implementarán de manera más sistemática.

En la conversación también surgieron reflexiones sobre los temores de los propietarios en torno a posibles conflictos, desconfianza hacia contratos o trámites formales y reservas respecto a arrendar a población vulnerable. Se señaló que estos miedos están atravesados por dinámicas culturales, historias comunitarias y contextos particulares de cada territorio. Ante ello, se reconoció la importancia de seguir construyendo confianza a través de procesos pedagógicos, apoyo constante y relaciones comunitarias sólidas.

Una intervención destacó la relevancia de comparar experiencias internacionales y observar cómo distintos países —como Uruguay, Brasil, Francia y Colombia— han abordado modelos de arriendo digno. La discusión permitió evidenciar que, en Ecuador, muchas de estas iniciativas no nacen del Estado, sino desde respuestas comunitarias y organizacionales ante vacíos institucionales, particularmente en el contexto de la crisis migratoria. Por ello, los acuerdos entre arrendadores, arrendatarias y organizaciones funcionan dentro de una lógica solidaria que no siempre puede formalizarse del todo en la normativa, pero que sostiene prácticas de confianza, corresponsabilidad y resolución de posibles problemas.

Hacia el final, se subrayó que la red de propietarios no debe entenderse solo como un mecanismo para disponer viviendas, sino como parte de un entramado de protección social más amplio, donde los propios arrendadores pueden convertirse también en sujetos de derecho y beneficiarios de programas comunitarios, de emprendimiento o de apoyo y articulación con las instituciones de nivel local.



Cierre de mesas

En el cierre del espacio de trabajo de las cinco mesas temáticas, las y los participantes compartieron una serie de reflexiones, aprendizajes y recomendaciones que sintetizan los principales aportes surgidos a lo largo del proceso.

La necesidad de continuar reflexionando colectivamente, incluso mediante encuentros virtuales, entre participantes al evento y personas interesadas en torno al tema de la vivienda en arriendo para personas en movilidad humana y población de acogida.

El fortalecimiento de organizaciones comunitarias de mujeres beneficiarias migrantes y de comunidades de acogida que pueden transformarse en interlocutoras de la política pública de vivienda y mejoramiento barrial. En este sentido se propuso formar a las beneficiarias de MERA como multiplicadoras en temas de género y derechos humanos, potenciando su rol como agentes de cambio en sus territorios. Los tres componentes —vivienda, ingresos, salud y lucha contra las violencias y la xenofobia— pueden contribuir a ello, en una visión integrada.

El desafío que representa intervenir espacios privados —inquilinatos y viviendas particulares en arriendo— con recursos públicos, un tema que requiere más debate y marcos adecuados para avanzar en la región.

Se planteó la urgencia de profundizar en las brechas socioculturales y de género presentes tanto del lado de arrendatarias —las más vulnerables pueden sentir barreras para proyectarse, necesitan mejorar su autoestima y empoderarse— como de arrendadores —quienes manifiestan aun temores a comprometerse o dudan a la hora de dar garantías de precios y estabilidad de los contratos—. Las redes o bancos de dueños no son fáciles de organizar, las garantías para pagos de alquiler no se han logrado obtener, pero las intervenciones a escala comunitaria o los kits de enseres básicos han sido iniciativas que han abierto canales de soluciones. Un trabajo analítico permitirá considerar cómo afectan las decisiones y promover mecanismos para compartir los riesgos y los beneficios. Se destacó la importancia de seguir impulsando experiencias hacia la mejora de la habitabilidad de la vivienda en arriendo para población migrante y/o vulnerable, articulando mejor iniciativas nacionales y locales, reconociendo que este mecanismo representa una alternativa necesaria para responder a las condiciones reales de movilidad humana.

Otro aprendizaje relevante se relacionó con la perspectiva de "vivienda primero", entendida como una estrategia dirigida a personas en situación de alta vulnerabilidad —riesgo de calle, migrantes recientes, mujeres cabezas de familia con situaciones precarias— que parta de una mayor seguridad en la vivienda arrendada donde viven —con contratos que eliminen el riesgo de desalojo y condiciones de habitabilidad, higiene, hacinamiento mejoradas— y tienda a generar condiciones de ocupación adecuadas, estables y dignas, para así dar una base suficiente al trabajo de cuidado a cargo socialmente de las mujeres, que les permita una mayor proyección hacia el aumento de sus ingresos, su salud física y mental y garantizarles una vida sin violencias.

Las y los participantes han subrayado la importancia de asegurar acompañamiento social y psicosocial transversal accesible en los barrios periféricos, con servicios en diferentes dimensiones, incluyendo la atención a la salud mental.

En esta misma línea, se insistió en que los Estados y las instituciones públicas deben permitirse innovar, aprender y pilotear nuevas estrategias, experimentadas inicialmente con recursos de la cooperación internacional, sobre todo cuando estas se desarrollan de la mano de actores locales.

Se sugirió avanzar hacia una política pública de mejoramiento cualitativo de la vivienda integrando la perspectiva de género intersectorial basada en modelos flexibles centrados en las necesidades de las personas de diferentes perfiles y no únicamente en la producción material de unidades habitacionales.

Entre los aprendizajes compartidos, se reiteró que la vivienda debe ser asumida no como un logro aspiracional, sino como un derecho capaz de sostener los proyectos de vida, en especial en procesos de integración de mujeres migrantes. Se propuso armonizar normativas y políticas públicas en materia de derechos humanos para superar prácticas y medidas administrativas discriminatorias, recordando que los derechos constitucionales deben prevalecer sobre normas reglamentarias.

Por último, se subrayó que la integración de la población migrante también depende del trabajo con las comunidades receptoras, lo que contribuye a disminuir resistencias y comportamientos xenófobos.



Conclusiones generales del evento

04

En la sesión final, facilitada por Jackeline Rojas, las y los participantes coincidieron en la necesidad de mantener los espacios de diálogo y aprendizaje generados durante el seminario, proponiendo continuar con reuniones virtuales para profundizar los debates y fortalecer las organizaciones populares que acompañan los procesos habitacionales.

Se señaló que el seminario permitió poner en la agenda pública la importancia de la discusión sobre la vivienda en arriendo, como parte sustancial de las soluciones de vivienda para más de la mitad de la población urbana en países latinoamericanos, en particular con su capacidad de acoger a personas en movilidad humana internacional o nacional y de bajos ingresos. La lucha contra el déficit cualitativo de la vivienda popular, en propiedad o arrendada, debe tener mayor atención en la agenda nacional y local.

Durante el seminario, se ha mostrado como la estrategia Housing First, inicialmente pensada para encontrar soluciones duraderas para habitantes de la calle, principalmente hombres, se puede adaptar a la problemática de la integración socioeconómica de las mujeres en movilidad humana y sus comunidades de acogida, en las ciudades latinoamericanas.

Desde una perspectiva de género, estas respuestas cualitativas en acompañamiento y mejora de espacios físicos contribuyen a fortalecer ciudades feministas más cuidadoras, más incluyentes y luchar contra las violencias de género, contra los desalojos abusivos, tanto en el espacio privado como público.

El mejoramiento de las condiciones de habitabilidad hacia una vivienda adecuada y/o una vivienda digna y segura debe incluir contratos estables con precios razonables y contribuir a aliviar las triples jornadas de trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres de todas las nacionalidades. Esta estabilidad contribuye a mejorar su salud física y mental, a garantizarles mayor seguridad, a promover su autoestima y su empoderamiento.

Para lograrlo, las iniciativas comunitarias de mejoramiento de espacios colectivos, que unan a las comunidades de acogida y a las familias en movimiento, tal como se pudo experimentar en vivo durante el seminario en el Parque La Amistad del barrio Vallado II, son claves para generar comprensión mutua y disminuir la xenofobia. Han sido ejemplares y serán muy recordadas por quienes estuvieron en esta vivencia compartida: mano a mano, sembrando, limpiando, pintando, cantando, hablando, se han relacionado las y los participantes del seminario, funcionarias e investigadoras, representantes de instituciones internacionales, las y los habitantes del barrio Vallado II, personas venezolanas, colombianas o de otras nacionalidades, las y los jóvenes de la comunidad muy activos y visibles, las y los niños con su alegría y danza, arquitectos y arquitectas, mujeres capacitadas en el sector de la construcción, lideresas con palabras fuertes e inspiradoras, promotoras caleñas comprometidas con su trabajo comunitario juntas con una asociación de mujeres constructoras de Bolivia. Este encuentro y su resultado palpable, un espacio público rehabilitado con su parque limpio, pintado, mejorado, un mural vistoso con un mensaje inspirador, han marcado el evento con un sello simbólico y concreto difícil de olvidar.

Estas actividades integradoras y ciudadanas son un primer paso para la construcción de un tejido humano más solidario, como base de nuevas redes de arrendadores o bancos de propietarios solidarios; dan la esperanza de ver surgir organizaciones comunitarias de mujeres sin discriminación de nacionalidad. Han sido un ejemplo de un auténtico acercamiento entre las autoridades de la urbe y la ciudadanía. Permitieron que los habitantes de una comunidad, en particular las mujeres y la juventud, se sientan existir, tengan legitimidad en sus demandas de infraestructura y diálogo, se sientan reconocidos, puedan proyectarse y echar raíces fuertes.

Las mujeres llamadas "vulnerables" o "en movilidad humana" han mostrado que, a pesar de las dificultades y obstáculos en su trayectoria de vida, del duelo de la pérdida de la vivienda en Venezuela, tienen recursos interiores y un potencial de integración social, cultural, económica inmenso. Siguen el camino, abierto hace décadas, por quienes son ahora parte de las comunidades de acogida, las mujeres que han construido sus casas, sus barrios, servicios comunitarios múltiples y no se han quedado de brazos cruzados frente a las muchas carencias de su entorno.

La habitabilidad de una vivienda segura en una ciudad feminista e incluyente debe medirse también en los domicilios en arriendo en sectores periféricos o en barrios informales o en donde viven familias de bajos ingresos. Las mujeres activas del proyecto MERA deben poder expresar sus necesidades prácticas y sus temores para poder superarlos. Pueden plantear necesidades estratégicas, tales como el derecho al descanso, al autocuidado, al estudio y la participación ciudadana y a compartir el peso de las tareas domésticas o comunitarias con los hombres de su vecindario.

Es necesario incluir en la política pública de vivienda, de la mano con las políticas sociales, nuevas herramientas y normas de intervención social e inversión que consideren el derecho a una vivienda digna y segura como un derecho humano de primer nivel que potencia a su vez otros derechos.

Vivir con menor hacinamiento, mejorar las condiciones sanitarias de la vida cotidiana, gozar de contratos de arriendo protectores sin riesgo de desalojo repentino, genera responsabilidad para garantizar pagos puntuales y permite a su vez tener mayor serenidad para mejorar sus ingresos, formarse, salir de situaciones de violencias de género, recibir asesoría en derecho civil y de familia, promover la igualdad de derechos en la casa, en el barrio y en el trabajo.

Este conjunto de servicios y oferta institucional y comunitaria puede proveer una base coherente para el ejercicio del conjunto de los derechos humanos y responder a las necesidades de cuidado, autonomía, desarrollo económico, salud sexual y reproductiva, salud mental y empoderamiento de las mujeres que han demostrado, con su valentía y su empeño, que quieren echar raíces en los barrios donde están viviendo.





Mujeres Echando Raíces
Cultivamos autonomía para cosechar futuro

France
AFD Agence Française de Développement
Expertise France Groupe AFD



Relatoría Seminario Internacional

PROYECTO

MUJERES ECHANDO RAÍCES - MERA

12 - 14 de noviembre

2025 - Cali (Colombia)